|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naciones Unidas | CCPR/C/MLT/3 | |
| Naciones Unidas Logo | **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos** | | Distr. general  31 de mayo de 2022  Español  Original: inglés  Español, francés e inglés únicamente |

**Comité de Derechos Humanos**

Tercer informe periódico que Malta debía presentar en 2021 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes[[1]](#footnote-1)\*

[Fecha de recepción: 26 de noviembre de 2021]

Sección A

Aplicabilidad interna del Pacto

1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus principios son puestos en práctica cada vez que, al elaborarse un nuevo proyecto de ley, se evalúa si se ajusta a los principios del Pacto. El legislador no cuenta con un *modus operandi* establecido para llevar a cabo esta labor. Los miembros de la judicatura y los fiscales reciben cursos de capacitación internos sobre los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el Pacto.

Reservas

* Artículo 13: El Gobierno de Malta hace suyos los principios establecidos en el artículo  13. Sin embargo, en las circunstancias actuales, no puede cumplir íntegramente las disposiciones de este artículo.
* Artículo 14, párrafo 2: El Gobierno de Malta interpreta que el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto no excluye la posibilidad de que una ley concreta imponga la carga de probar determinados hechos a una persona imputada en virtud de dicha ley.
* Artículo 14, párrafo 6: Aunque acepta el principio de la indemnización por encarcelamiento ilícito, el Gobierno de Malta no está en condiciones, en las circunstancias actuales, de cumplir ese principio, de conformidad con el artículo 14, párrafo 6, del Pacto.
* Artículo 20: El Gobierno de Malta interpreta el artículo 20 de modo compatible con los derechos reconocidos en los artículos 19 y 21 del Pacto, pero se reserva el derecho de no introducir ninguna ley a los efectos del artículo 20.
* Artículo 22: El Gobierno de Malta se reserva el derecho de no aplicar el artículo 22 en la medida en que las medidas legislativas existentes puedan no ser plenamente compatibles con dicho artículo. “El Gobierno de Malta declara que, en virtud del artículo 41 del presente Pacto, reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones presentadas por otro Estado parte, siempre y cuando tal Estado parte haya realizado, al menos doce meses antes de la presentación de su comunicación relativa a Malta, una declaración en virtud del artículo 41, reconociendo la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones que le conciernan”.

Institución nacional de derechos humanos

2. Ha finalizado la segunda lectura del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad (proyecto de ley núm. 97 de 2019), que debe ser analizada por la Comisión Adjunta de Examen de Proyectos de Ley.

3. El proyecto de ley prevé la creación de un organismo denominado Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, en consonancia con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (los Principios de París) y la legislación de la Unión Europea en materia de igualdad, que asumirá la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos, en particular el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en Malta. El proyecto de ley dispone la disolución de la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad de Hombres y Mujeres y la atribución de sus funciones a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, en su calidad de primera institución nacional de derechos humanos de Malta.

Marco jurídico de lucha contra la discriminación

4. El proyecto de ley de igualdad, proyecto de ley núm. 96 de 2019, reúne todas las disposiciones en materia de igualdad y eleva la protección contra todas las formas de discriminación a un amplio abanico de características protegidas hasta un mismo nivel.

5. El proyecto de ley, que está en fase de examen en comisión parlamentaria, prohíbe de forma general todas las formas de discriminación en diversos ámbitos de la vida, con vistas a promover la igualdad y a prevenir la discriminación, e impone obligaciones positivas al Estado. También incorpora y va más allá de las normas mínimas de las disposiciones pertinentes de la Directiva núm. 2000/43/CE del Consejo de la Unión Europea, de 29 de junio de 2000, que consagra el principio de la igualdad de trato entre las personas, independientemente de su origen racial o étnico; la Directiva núm. 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; la Directiva núm. 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro; la Comunicación de la Comisión Europea (22.12.2011 C (2011) 9497), que comprende las Directrices sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo a los seguros, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-236/09 (Test-Achats); la Directiva del Consejo núm. 2006/54/EC de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); la Directiva del Consejo núm. 2010/41/EU del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, y deroga el capítulo 456 de las Leyes de Malta y sus leyes subsidiarias.

Discriminación racial

6. El Gobierno de Malta acaba de lanzar la Estrategia de Lucha contra el Racismo (2021‑2023), primer plan de acción nacional maltés de lucha contra el racismo y la xenofobia. Entre el 9 de octubre y el 9 de noviembre de 2020 se llevó a cabo una consulta pública en la que 61 encuestados formularon sus propuestas de medidas en diversos ámbitos, como la investigación, la aplicación de la ley, la educación, el empleo y la vivienda, entre otros. Desde un principio, la finalidad de este proceso y de sus resultados era mejorar la respuesta del Gobierno a la discriminación, el racismo y la xenofobia y su integración en las políticas correspondientes, así como combatir el racismo social e individual con actividades en las que participaran los principales actores democráticos y los interlocutores sociales, y trabajar en la concienciación de la comunidad, valiéndose de las leyes contra el racismo y la discriminación vigentes. La legislación maltesa condena y sanciona la discriminación, los delitos de odio y el discurso de odio en todas sus formas: artículo 45 de la Constitución de Malta, Código Penal (cap. 9), Ley de Policía (cap. 164), Ley de Extradición (cap. 276), etc.

7. La Estrategia de Lucha contra el Racismo 2021-2023 fue adoptada por el Gabinete el miércoles 28 de julio de 2021. Entró en vigor oficialmente el jueves 30 de septiembre de 2021 y fue presentada a las partes interesadas y a los beneficiarios en una conferencia el viernes 15 de octubre de 2021. Se trata de un documento de política exhaustivo, cuyo objetivo es afrontar y eliminar el racismo en todas sus formas, individual, sistémica y social, y estimular y apoyar la inclusión intercultural. Sus 22 medidas convierten a la lucha contra el racismo y la discriminación en responsabilidades tanto personales como colectivas en todos los sectores de la sociedad: en el Gobierno y el sector público, las instituciones democráticas y políticas, los medios de comunicación, pero también en el sector privado, la sociedad civil y la población en general. La Estrategia aplicada por Malta está en consonancia con el Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025. La fase de aplicación se inició con la primera reunión de la Plataforma contra el Racismo (Medida 3) el pasado mes de julio y la Conferencia de Partes Interesadas en la Estrategia de Lucha contra el Racismo el 15 de octubre. El primer informe sobre los avances se redactará en el cuarto trimestre de 2022.

8. En abril de 2021 también se creó la Agencia de Apoyo a las Víctimas, organismo público que atiende los aspectos psicológicos y jurídicos de los delitos de odio, además de educar al público y sensibilizarlo sobre el auge de este fenómeno. La Agencia consta de un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito psicosocial, juristas y miembros de la Unidad de Apoyo a las Víctimas de la Fuerza de Policía de Malta y del Departamento de Libertad Vigilada y Libertad Condicional para ofrecer servicios holísticos bajo un mismo techo. La antigua Unidad de Delitos de Odio será absorbida por esta Agencia. Ofrece una serie de servicios gratuitos de apoyo, en particular, apoyo psicológico, asistencia jurídica, una línea telefónica especial y chats de asistencia a las víctimas de los delitos de odio, así como a sus familias.

9. Por otro lado, en el marco del proyecto bianual “Igualdad para todos en Malta”, financiado por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea, ejecutado por el Gobierno de Malta en colaboración con Aditus Foundation, la Red Europea contra el Racismo y la Red Europea sobre Religión y Creencias, se están desarrollando las siguientes actividades destinadas a organizaciones de minorías raciales, étnicas y de minorías religiosas, así como al público, en general:

* Formaciones impartidas a personas pertenecientes a las minorías, incluidas víctimas de la discriminación basada en la religión o las creencias, la raza y/o el origen étnico, y/o la discriminación múltiple, con el fin de empoderarlas y garantizar el disfrute de sus derechos y de los nuevos recursos jurídicos legalmente establecidos. La formación se impartirá a 120 representantes de minorías religiosas, raciales y étnicas, cada uno de los cuales formará posteriormente a otros 20 miembros en su propia organización aproximadamente, lo que elevaría el número total de personas formadas a 2.400.
* Labor de sensibilización a las directivas de la UE y la legislación nacional relacionadas con la discriminación por motivos de religión o creencias, raza u origen étnico, y discriminación múltiple, así como a la comprensión intercultural y la igualdad de oportunidades, destinada al público en general.
* Modelo de divulgación dirigido a la comunidad, a través de consejos locales, para sumarlos a la lucha contra la discriminación y desarrollar nuevas herramientas de lucha contra la discriminación a escala local, ya utilizadas en el contexto de la integración de migrantes, y que pueden a su vez ponerse al servicio de la población residente en general.

10. El 19 de mayo de 2019 se presentaron cargos contra dos personas acusadas del asesinato de Lassana Cisse. El Tribunal de Magistrados (Malta), en calidad de Tribunal de Investigación Penal, consideró que había motivos suficientes para enjuiciar a los acusados. Está en curso el proceso de recopilación de pruebas.

Discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero  
(LGBT)

11. El Gobierno ofreció formación a todos los docentes de desarrollo personal, social y profesional en las escuelas públicas de enseñanza primaria y secundaria. También participaron docentes de escuelas religiosas e independientes y se impartió formación a futuros docentes de desarrollo personal, social y profesional que cursaban estudios en la Universidad de Malta. El Gobierno participó asimismo en la organización de un seminario de formación de dos días de duración coordinado por la Foundation for the Wellbeing of Society y el Movimiento por los Derechos LGBTIQ de Malta, al que asistieron equipos de servicios psicosociales de diferentes escuelas religiosas.

12. Una serie de reuniones con los directores de los departamentos responsables de los planes de estudio, aprendizaje permanente y empleabilidad y de los servicios educativos permitieron acordar un programa intracurricular con dos centros de enseñanza media. En julio de 2019 se iniciaron una serie de reuniones con los responsables educativos de seis temas seleccionados y los directores de ambos colegios para empezar a trabajar sobre los aspectos técnicos del proyecto. La aplicación del proyecto piloto se vio interrumpida por la crisis de la pandemia de COVID 19. Sin embargo, se espera la reanudación de las actividades a lo largo del nuevo curso escolar.

13. El Gobierno también patrocinó el evento previo a la conferencia organizado por la Asociación de Enseñanza del Inglés en octubre de 2018. Este evento, de un día de duración, se centró en las perspectivas LGBTIQ en la enseñanza del inglés.

14. También se distribuyeron en las escuelas primarias una serie de materiales, tanto en inglés como en maltés, sobre la igualdad, la diversidad de género y las familias arco iris, con vistas a ayudar a los profesores a plantear cuestiones relativas a los LGBTIQ en las aulas.

15. Se llevaron a cabo asimismo sesiones de formación sobre el tratamiento de las cuestiones LGBTIQ en el ámbito educativo, en las que participaron unos 50 educadores, a través del Instituto de Educación.

Representación de la mujer en la vida política y pública

16. La Ley núm. XX de 2021, aprobada por el Parlamento en abril de 2021, enmendó la Constitución maltesa para introducir medidas positivas temporales, necesarias y razonables en una sociedad democrática en pos de la igualdad de hecho entre hombres y mujeres en el ámbito de la política y modificó la Ley sobre las Elecciones Generales con vistas a incrementar el número de comisiones electorales y a garantizar la igualdad de representación entre sexos.

17. El efecto práctico de esta enmienda constitucional será la elección de un mínimo de 40 % de diputadas mujeres en la Cámara de Representantes en los próximos comicios.

Violencia contra las mujeres y los niños

18. En 2018, tanto la violencia de género como la violencia doméstica pasaron a ser competencia de la Comisión sobre Violencia Doméstica de Malta.

19. Todos los miembros del cuerpo de policía están recibiendo formación sobre cómo tratar a las víctimas de la violencia doméstica. También se ha introducido un simulador de realidad virtual en la Academia de Policía para formar a los agentes de modo tal que sean capaces de empatizar con las víctimas de la violencia doméstica.  Por otro lado, los agentes que subestimen la gravedad de los casos de violencia doméstica o muestren falta de empatía se enfrentarán a medidas disciplinarias.

20. Malta reconoce la necesidad de empoderar a las víctimas de los delitos y, en última instancia, de ayudarlas a recuperarse de sus secuelas. Para lograrlo es imprescindible apoyar a sus ciudadanos y prestarles el apoyo que necesitan para acceder de manera no discriminatoria a los derechos de las víctimas. Por esa razón, se creó la Agencia de Apoyo a las Víctimas en virtud de la Notificación Legal 418 de 2020 (Legislación Subsidiaria 594.37), como agencia multidisciplinar que congrega a miembros de la policía y del Departamento de Libertad Vigilada y Libertad Condicional, a profesionales de la Unidad de Delitos de Odio, a profesionales del sistema de justicia y a otros funcionarios públicos en el marco de un mismo ente público. Tal y como se especifica en la declaración de su misión, la Agencia debe actuar como punto de contacto nacional para las víctimas de delitos y promover un enfoque holístico de las necesidades y el apoyo con vistas a mejorar la calidad de vida de todas las víctimas de delitos.

21. El Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo trabaja actualmente en dos iniciativas sobre la violencia doméstica. Un folleto informativo sobre la violencia doméstica está en fase de preparación y se editará en diferentes idiomas. El Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo también se ha asociado con el Servicio Jesuita a Refugiados para lograr que imparta sesiones informativas y presentaciones en centros de sensibilización exclusivamente sobre la cuestión de la violencia doméstica. También se está intentando colaborar con Victim Support Malta sobre esta misma cuestión.

22. En lo que respecta a la habilitación de refugios, el Ministerio de Justicia Social y Solidaridad, la Familia y los Derechos de la Infancia y la Fundación de Servicios de Bienestar Social (FSWS) mantienen una serie de acuerdos públicos de colaboración social con organizaciones no gubernamentales (ONG), a las que financian por su labor con las víctimas de la violencia doméstica. Se trata esencialmente de servicios de acogida y apoyo. Valgan como ejemplo la Fondazzjoni Merħba Bik (de hogares de emergencia) y la Fondazzjoni Sebħ (de hogares de transición), dos hogares para víctimas de la violencia doméstica y de género gestionados por ONG religiosas y financiados y regulados en virtud de un acuerdo público de colaboración social entre ONG y el Estado.

23. También cuenta con servicios de lucha contra la violencia doméstica la Aġenzija Appoġġ (la Agencia Nacional para los Niños, las Familias y la Comunidad) de la Fundación de Servicios de Bienestar Social. El objetivo del Servicio de Lucha contra la Violencia Doméstica es brindar servicios de trabajo social especializado a las víctimas de la violencia doméstica. El servicio está formado por un equipo de trabajadores sociales profesionales que prestan apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y a sus hijos. Su finalidad es apoyar a las víctimas en momentos de crisis, proporcionándoles asistencia inmediata y atender sus necesidades más urgentes, ayudándolas a desarrollar un plan de seguridad y aportándoles apoyo continuo.

Aborto

24. Malta tiene el compromiso de promover la salud sexual y reproductiva. Para ello es preciso proteger el derecho de las mujeres a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre los asuntos relativos a su sexualidad, el momento de tener hijos y el número de estos, sin sufrir ningún tipo de coacción, discriminación o violencia.

25. La interpretación que hace Malta del derecho a la salud sexual y reproductiva en el contexto del derecho a la salud no incluye el derecho al aborto, ya que este va en contra del derecho a la vida, que es primordial. El aborto es ilegal en Malta y no está incluido en la gama de servicios de salud sexual y reproductiva ofertados a escala nacional.

26. El sistema de salud pública ofrece de forma gratuita una serie de servicios de salud sexual y reproductiva. Entre ellos figuran los servicios de planificación familiar, maternidad sin riesgo, tratamiento de la esterilidad, reproducción asistida, servicios para personas transgénero, prevención, pruebas de carácter confidencial, diagnóstico y tratamiento de infecciones del aparato reproductor, infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, así como prevención y tratamiento del cáncer del sistema reproductor y la morbilidad materna. Por otro lado, los anticonceptivos son fácilmente accesibles en las farmacias comunitarias. En 2017 se introdujeron las pruebas rápidas del VIH en la Clínica de Medicina Urogenital. En 2017 Malta autorizó la venta libre de la píldora del día siguiente.

27. Malta prohibió los viajes durante la COVID-19, principalmente entre marzo y junio de 2020. Posteriormente se autorizaron los viajes a todos los países de la UE (salvo Suecia, que sería incluida en la lista ámbar de viajes autorizados recién en septiembre de 2020).

28. Los datos de nuestros consolidados Sistemas Nacionales de Información Hospitalaria y Registros de Mortalidad no han registrado complicaciones posteriores a la práctica de abortos (incluidos todos los códigos O04 − O07 de la CIE 10) en los últimos 10 años.

29. Por otro lado, la mortalidad materna registrada en Malta durante el periodo que abarca el informe ha sido nula, desde 2010.

30. Se han reseñado dos casos de enjuiciamiento relacionados con la práctica de sendos abortos, ambos correspondientes al año 2014. Desde entonces no se han registrado más procesos judiciales.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes de policía

31. La Fuerza de Policía de Malta (MPF) ha establecido una serie de procedimientos operativos estándar y circulares que ofrecen directrices sobre el uso de la fuerza a los agentes de policía. Hay un Código de Ética, normas sobre el uso de pistolas de descarga eléctrica (“tásers”) y del gas pimienta, así como directrices sobre la cuestión de las armas de fuego y su uso.

32. Por otro lado, se aplican las siguientes medidas para evitar los malos tratos:

a) El agente de policía encargado de llevar a cabo una entrevista/interrogatorio debe estar acompañado por un compañero que oficie como testigo;

b) El sospechoso interrogado recibe la lista escrita de los derechos legales que lo amparan en un idioma que entienda;

c) Tiene derecho a consultar a un abogado e incluso puede asistir a la entrevista acompañado por él;

d) En cuanto queda detenido, el sospechoso puede consultar a un abogado de su elección;

e) Al interactuar con el público, los agentes están obligados a encender sus cámaras corporales para grabar la interacción;

f) Tanto el sonido como las imágenes de los interrogatorios que versen sobre cuestiones graves son debidamente grabados.

33. El Gobierno siempre ha velado por que se adoptaran las medidas disciplinarias necesarias en respuesta a toda denuncia de abuso. Los Servicios de Detención (DS) han realizado importantes inversiones en recursos humanos, no solo con la contratación de 106 funcionarios en 2021, sino también a través de la formación dispensada tanto al personal nuevo como al veterano. La formación sobre el uso de la fuerza también ha sido incluida en el nuevo plan de estudios. Los Servicios de Detención han actualizado recientemente sus procedimientos internos aplicables en caso de incidentes. Asimismo, han elaborado un formulario de incidentes y consignan en un registro todos los incidentes ocurridos en los Servicios de Detención. Se ha asignado a una persona la responsabilidad de gestionar el registro.

Trata de personas

34. El Gobierno de Malta ha redoblado su compromiso en la lucha contra la trata de personas, impulsando principalmente una mayor colaboración entre instituciones en la identificación de casos de trata y la formación de funcionarios públicos.

Marco legislativo

35. El Gobierno maltés trató de mejorar su marco legislativo con vistas a reducir el empleo ilegal, especialmente de nacionales de terceros países que pueden a su vez encontrarse en situaciones de trata. El 1 de enero de 2019 entraron en vigor dos nuevas leyes laborales:

* La Legislación Subsidiaria 452.115 − Ordenanza Nacional sobre Vacaciones Anuales establece procedimientos claros sobre la cancelación de las vacaciones, las licencias especiales, la acumulación de las bajas por permiso de maternidad y el pago del saldo de las vacaciones en caso de terminación del empleo. También aumenta las obligaciones de los empleadores en caso de baja forzosa.
* La Legislación Subsidiaria 452.116 − Regulación de las nóminas desglosadas exige a los empresarios que presenten mensualmente sus nóminas a los trabajadores. Las nóminas emitidas a los empresarios deben incluir el número de horas trabajadas, el número de horas trabajadas a precio de horas extraordinarias y los saldos de vacaciones, entre otros. El incumplimiento de estas condiciones puede acarrear una multa a los empleadores.

36. Las nuevas leyes facilitarán la recopilación de datos por parte de los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, principalmente la Fuerza de Policía de Malta y el Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo, durante la investigación de posibles casos de trata laboral.

37. Por otro lado, el 4 de junio de 2019 se publicaron, en virtud de la Notificación Legal 112 de 2019, el Procedimiento de Investigación de Nacionales de Terceros Países en Situación de Estancia Ilegal y Empleo Ilegal y los reglamentos sobre el control de nacionales de terceros países matriculados en centros educativos. En virtud de esta Notificación Legal, se creó una nueva Unidad de Información en el marco de la Agencia de Identidad de Malta con el fin de inspeccionar a los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal y empleo ilegal. Esto es posible con arreglo a las Normas Mínimas sobre Sanciones y Medidas contra los Empleadores de Nacionales de Terceros Países en Situación de Estancia Ilegal (S. L 217.14 de las Leyes de Malta) y la legislación sobre el control de los Nacionales de Terceros Países matriculados en centros educativos.

38. Por otro lado, el Gobierno procura sistemáticamente que los contratos de trabajo cumplan unos requisitos mínimos. Las empresas que firman contratos con la Administración están obligadas a cumplirlas íntegramente. La legislación maltesa cuenta de hecho con disposiciones adecuadas para luchar contra la trata de personas y los delitos laborales.

39. La Ley sobre las Agencias de Empleo prohíbe el cobro de honorarios a los trabajadores por su contratación. Por otro lado, las agencias de empleo están obligadas a mencionar su número de licencia en los anuncios de contratación que publican.

40. Asimismo, las agencias de empleo deben abstenerse de referir a ningún empleado al empleador hasta que este les haya brindado información detallada sobre el puesto que desea cubrir, es decir, una descripción adecuada del trabajo, de las condiciones de empleo y de todo requisito especial establecido por el empleador. El empleador debe presentar al trabajador recién contratado un acuerdo escrito en el que se estipulen los términos y las condiciones de empleo.

41. Cabe señalar que todos los ciudadanos malteses reciben certificados de nacimiento y documentos de identidad. Existe asimismo una legislación para evitar situaciones de apatridia, por ejemplo, en el caso de los expósitos. A este respecto, cabe señalar asimismo que Malta se ha adherido recientemente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

42. Por otro lado, con vistas a seguir reforzando las disposiciones jurídicas en los ámbitos pertinentes, Malta ratificó el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, de 1930, y respaldó el llamamiento a la acción para poner fin al trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, lanzado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017. Corrobora así su determinación de seguir apoyando institucionalmente la promoción de entornos de trabajo saludables y positivos. El nuevo Protocolo establece obligaciones en relación con la lucha contra el trabajo forzoso, la protección de las víctimas y su acceso a recursos, y hace hincapié en el vínculo entre el trabajo forzoso y la trata de personas, incluida la trata sexual. Malta prevé participar en la campaña “50 por la libertad” liderada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

43. Con el fin de reforzar las disposiciones legales sobre la trata de personas con fines de extracción de órganos y tráfico de órganos, el Parlamento publicó el 16 de diciembre de 2016 una nueva ley sobre la donación de órganos, tejidos y células humanas (capítulo 558 de las Leyes de Malta). Esta ley introdujo enmiendas subsiguientes en el Código Penal (capítulo 9 de las Leyes de Malta). Así pues, el artículo 248CA del Código Penal establece medidas contra los abusos de personas o el abuso de la extracción de órganos con fines de explotación y tiene por objeto incorporar artículos sustantivos del Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos y garantizar el pleno cumplimiento de dicho Convenio.

44. El 2 de mayo de 2016 entraron en vigor nuevas medidas para frenar la precariedad laboral en los servicios de limpieza, administración, seguridad y asistencia subcontratados en los departamentos gubernamentales y/o la organización del sector público. También se introdujeron nuevas medidas de adjudicación de contratos destinados a mejorar la calidad de los servicios prestados por los contratistas y las prestaciones que ofrecen a sus empleados en el lugar de trabajo. Por otro lado, los contratos de suministro de bienes y servicios se adjudicarán a partir de ahora en función de la “mejor relación calidad-precio”, y no según la política de cuanto más barato mejor. Todas estas medidas no solo protegen a los trabajadores malteses y extranjeros de la explotación en el territorio de Malta, sino que también protegen a trabajadores que podrían ser explotados en los países que suministran bienes consumidos en Malta.

Nueva estrategia: enero de 2020-diciembre de 2023

45. El Gobierno de Malta emprendió un proceso de consulta nacional en septiembre y octubre de 2019, en el marco de la reforma de la lucha contra la trata de personas y la prostitución a escala nacional. La cuestión de la prostitución ha sido incluida en esta reforma, ya que el Gobierno reconoce el vínculo entre ambos fenómenos, así como la existencia de malteses que podrían ser explotados con fines sexuales en sus países de origen.

46. El propósito de la apertura de este periodo de consulta era elaborar una estrategia nacional quinquenal (2020-2024) contra la trata de personas, articulada en torno a los siguientes objetivos:

* Desarrollar herramientas más eficaces de identificación de potenciales víctimas de la trata y facilitar la prestación de apoyo profesional a través de un mecanismo integral de remisión a escala nacional.
* Reforzar las armas judiciales y de investigación del país contra los autores de la trata de personas y conseguir que sean condenados con mayor celeridad.
* Establecer mecanismos de prevención e introducir normas destinadas a salvaguardar los intereses de las personas vulnerables, más expuestas al riesgo de ser víctimas de la trata.

47. Una de las principales prioridades de la estrategia es establecer una estructura permanente, en el marco del Gobierno, encargada de la aplicación general de la estrategia. Esta estructura también coordinará la labor de las entidades estatales y no estatales que ya forman parte del actual grupo de trabajo del Gobierno sobre la trata de personas constituido en el seno del Ministerio del Interior y de la Seguridad Nacional, entre ellas, agencias de asistencia social, inmigración y empleo, la Fuerza de Policía de Malta y la sociedad civil.

48. En el marco del Plan de Acción de enero 2017-diciembre 2019, se impartió una formación a una serie de partes interesadas, incluidas personas que trabajan con personas vulnerables, como los migrantes de los centros de acogida. La formación también estaba dirigida a los funcionarios de la agencia Appoġġ, que mantienen contactos habituales con personas vulnerables. Estos funcionarios ayudan a las posibles víctimas de la trata y las animan a denunciar cualquier delito a la policía de tal modo que sus autores sean investigados y procesados.

49. Para concienciar a los nacionales desplegados en el extranjero, por ejemplo, diplomáticos, acerca de lo que es y lo que implica la trata de personas, en julio de 2015 se celebró una sesión de capacitación de media jornada para 150 embajadores, diplomáticos y cónsules de las representaciones diplomáticas en el extranjero. Esta sesión se materializó gracias a la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores. La formación fue impartida por dos expertos extranjeros de la OIM y los participantes recibieron información sobre la trata de personas y sobre las funciones que desempeñan en la prevención del fenómeno. Tras la capacitación impartida en julio de 2015 a los embajadores y diplomáticos, se difundió un folleto informativo entre las distintas representaciones maltesas en el extranjero, concretamente en China, Filipinas, Argelia y Rusia. Fue traducido a diferentes idiomas y contiene información sobre el trabajo regular y las condiciones laborales en Malta, así como sobre los indicadores de la trata de personas. El folleto, que incluye asimismo los números de teléfono de la policía y de la Agencia Appoġġ, fue elaborado por la OIM en consulta con las partes interesadas y el Ministerio del Interior y de la Seguridad Nacional. Su objetivo es brindar información a los nacionales de terceros países que deseen ir a Malta a trabajar. En el marco de esta iniciativa se ejecutaron parcialmente diversas medidas de sensibilización proyectadas.

50. Un resultado importante de otro evento de formación organizado conjuntamente por el Ministerio del Interior y la OIM fue la publicación de una lista de indicadores nacionales sobre la identificación de las víctimas de la trata, distribuida entre las partes interesadas locales activas en zonas donde pueden entrar en contacto con víctimas o víctimas potenciales de la trata con fines de adopción. Se trata de la policía (la Brigada Antivicio, Inmigración y Control de Fronteras), la Agencia Appoġġ, el sistema de salud, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo, la Oficina del Comisionado para los Refugiados, la Corporación de Empleo y Formación profesional, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Cáritas Malta, entre otros.

51. También se difundió la lista de indicadores nacionales entre los profesionales considerados de primera línea, como las ONG que trabajan en centros de detención y en centros abiertos, los asistentes sociales del Comisionado para los Refugiados y los asistentes sociales del Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo. Todos estos profesionales han recibido formación en este terreno y han participado en la elaboración de los indicadores. Asimismo, se ha diseñado un Mecanismo de Remisión de Víctimas. A fin de consolidar este mecanismo y agilizar las operaciones entre las partes interesadas, se elaboraron procedimientos operativos estándar.

52. En 2020, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo, en coordinación con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, creó un nuevo equipo: el Equipo de Evaluación de la Vulnerabilidad. Actualmente, evalúa a personas potencialmente vulnerables en el Centro de Acogida Inicial, los centros cerrados y los centros abiertos. El Organismo atesora un historial y una amplia experiencia en evaluaciones de vulnerabilidad. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo aporta el valor añadido de una metodología estructurada de evaluación de la vulnerabilidad y el apoyo necesario para llevar a cabo más evaluaciones de las que permitiría la mera capacidad del Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo. Este equipo fue creado para garantizar que se evalúe debidamente a los adultos vulnerables de los centros. Las derivaciones pueden ser internas, de modo que los usuarios del servicio pueden ser derivados por todos los equipos del Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo:

* Coordinadores de los centros, equipo de atención y equipo terapéutico. Todas las demás entidades y ONG que visitan los centros cerrados y abiertos también pueden derivar personas rellenando un formulario de remisión específico.

Información estadística sobre las víctimas de la trata de personas entre 2014  
y 2020

| *Víctimas* | *Identificadas formalmente* | *Mujer* | *Hombre* | *Edad* | *Nacionalidad* | *Explotación* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 3 | 0 | Adulto | China | Sexual |
|  |  | 1 | 0 | Adulto | Indonesia | Laboral |
|  |  | 0 | 1 | Adulto | China | Laboral |
|  |  | 1 | 0 | Adulto | Rumana | Sexual |
|  |  | 9 | 0 | Adulto | Vietnamita | Laboral |
|  |  | 2 | 0 | Adulto | China | Laboral |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 0 | Adulto | China | Sexual |
|  |  | 1 | 0 | Adulto | Italiana | Sexual |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 13 | 18 | Adulto | Filipina | Laboral |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 0 | Adulto | China | Sexual |
|  | 2 | 2 | 0 | Adulto | Húngara | Sexual |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 9 | 10 | Adulto | Ucraniana | Laboral |
|  | 14 | 10 | 4 | Adulto | Filipina | Laboral |
|  | 1 | 1 | 0 | Menor | Maltés |  |
|  | 1 | 1 | 0 | Adulto | Filipina | Laboral |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 | 0 | Adulto (1) | Filipina (1) | Laboral y sexual |
|  |  |  |  | Menores (3) | Maltesa (3) | Sexual |

Detención administrativa de migrantes y solicitantes de asilo

53. Se lleva a cabo una evaluación individual de cada solicitante de asilo que entra de forma irregular y solo si es necesario se emite una orden de detención. Se ha previsto introducir referencias explícitas al hecho de que la detención debe ser una medida de último recurso. Por el momento no está previsto seguir reduciendo la revisión judicial inicial de las órdenes de detención.

54. En 2019 se estableció un equipo terapéutico constituido por oficiales asistentes en psicología, intérpretes, asesores y un psicólogo, que puede ser consultado a diario. También ofrece sus servicios en centros abiertos y centros de detención, y evalúa a los residentes ingresados en el Hospital Monte Carmelo. Los intérpretes están siempre presentes junto a los evaluadores.

55. El objetivo de la evaluación es proporcionar a los clientes un espacio seguro para compartir sus experiencias, lo que permite al equipo realizar las derivaciones adecuadas para satisfacer sus necesidades individuales. Las evaluaciones se realizan de forma voluntaria a los solicitantes de asilo mayores de 16 años.

56. En el caso de una persona menor de 16 años, cabe obtener el consentimiento de los padres o el tutor legal. Debido a la naturaleza de las evaluaciones psicológicas, los oficiales asistentes en psicología deben esperar al menos cuatro semanas a partir de la fecha de llegada antes de proceder a las evaluaciones. Cuando un cliente parece vulnerable, el asistente interviene y lo deriva a otros profesionales. Las evaluaciones se llevan a cabo por medio de un cuestionario socio-demográfico que recaba información sobre la vida de los clientes antes de la migración, el viaje y su experiencia posterior a la migración, así como una lista de control de síntomas de Hopkins, herramienta psicológica utilizada para evaluar niveles de ansiedad y depresión.

57. Los asistentes también ofrecen sesiones informativas sobre los servicios psicosociales del Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo, salud mental y síntomas de ansiedad, depresión y trastornos por estrés postraumático al tercer día de la llegada.

58. En 2020, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo, en coordinación con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, creó un nuevo equipo: el Equipo de Evaluación de la Vulnerabilidad. Actualmente, evalúa a personas potencialmente vulnerables en el Centro de Acogida Inicial, los centros cerrados y los centros abiertos. El Organismo atesora un historial y una amplia experiencia en evaluaciones de vulnerabilidad. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo aporta el valor añadido de una metodología estructurada de evaluación de la vulnerabilidad y el apoyo necesario para llevar a cabo un número mayor de evaluaciones de las que permitiría la mera capacidad del Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo. Este fue creado para garantizar que se evalúe debidamente a los adultos vulnerables de los centros. Las remisiones pueden ser internas, es decir que los usuarios del servicio pueden ser derivados por todos los equipos del Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo: coordinadores de los centros, equipo de atención y equipo terapéutico. Todas las demás entidades y ONG que visitan los centros cerrados y abiertos pueden derivar a personas rellenando un formulario de remisión específico.

59. En 2021, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo contrató a tres nuevos asistentes sociales para complementar al coordinador de asistencia social de cada centro. Su función consiste en llevar a cabo un seguimiento estricto del cliente en colaboración con el trabajador social, el coordinador de asistencia social y el equipo psicosocial de los residentes. Por otro lado, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo tiene previsto reforzar su equipo de evaluadores de la vulnerabilidad contratando a ocho profesionales en 2022.

60. El principio del interés superior del niño, que siempre ha estado en el centro de la práctica administrativa maltesa, está incorporado en la definición de “representante”, y en el artículo 17A de la Ley de Protección Internacional, que introdujo la protección humanitaria temporal en el sistema legislativo nacional en virtud de la Ley XL de 2020. Además, el principio fue incorporado al Reglamento sobre las Condiciones de Acogida en 2015, a saber, en su artículo 14, y en el Reglamento sobre las Normas de Procedimiento de la Concesión y Retirada de Protección Internacional, en la definición de “representante” del artículo 17 del Reglamento 17, y en su artículo 18, en vigor desde 2015.

61. Las personas vulnerables, de conformidad con la definición del Reglamento sobre las Condiciones de Acogida de los Solicitantes de Asilo, SL 420.06, incluidas las menores, no son objeto de órdenes de detención de las autoridades de inmigración a su salida del Centro de Acogida Inicial. Son alojadas en centros abiertos adaptados a sus circunstancias específicas. Los casos de familias con niños y de menores no acompañados se tramitan con rapidez para garantizar que puedan ser trasladados a centros de régimen abierto a la mayor brevedad. Cuando la evaluación de edad permite confirmar la edad de un menor, este es trasladado de inmediato a instalaciones abiertas. Cuando el proceso de evaluación de la edad no permite disipar la incertidumbre, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo requiere la realización de un examen óseo.

62. A lo largo de todo el proceso de determinación de la edad, los evaluadores procuran conceder el beneficio de la duda al supuesto menor no acompañado solicitante de asilo.

63. Por otro lado, con independencia de la situación de sus padres o de la suya propia, todos los menores no acompañados tienen acceso gratuito a la educación pública. Cuando resulta necesario, sobre todo en lo que se refiere a las necesidades lingüísticas, se ponen a disposición de estos menores clases preparatorias en las escuelas públicas. Una vez concedida la protección internacional, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento sobre las Normas de Procedimiento del Examen de la Protección Internacional (SL 420.07), se inician los procedimientos de localización de los familiares de los menores no acompañados. En el caso de que se logre identificar con certeza a sus familiares, se toman medidas adicionales, probablemente con vistas a la reunificación familiar, siempre y cuando se considere que esta medida redunda en el interés superior del niño.

64. A todos los menores no acompañados se les asigna un trabajador social que les presta asistencia a lo largo de toda su estancia en los centros gestionados por el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo. El trabajador social asignado llevará a cabo una evaluación holística de las necesidades del menor para determinar en qué ámbitos necesita apoyo. En 2020, el Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo estableció un nuevo servicio, conocido como Servicios de Protección de los Menores No Acompañados Solicitantes de Asilo, dedicado a salvaguardar los intereses de estos menores.

65. El Jefe del Servicio de Inmigración (comisario de policía) decide si se procede a la detención o se opta por la imposición de alternativas a la detención del inmigrante irregular solicitante de protección internacional (mientras permanece en el Centro de Acogida Inicial). La detención y las alternativas a la detención solo pueden imponerse a personas que no sean consideradas vulnerables con arreglo al Reglamento sobre las Condiciones de Acogida (legislación subsidiaria 420.06).

66. La normativa prevé el recurso a alternativas a la detención por parte de la Policía de Inmigración. Estas medidas pueden alcanzar una duración no superior a 9 meses y pueden adoptar la forma de:

* Comparecencia en un lugar prestablecido en fechas determinadas
* Residencia en un lugar predeterminado
* Depósito o entrega de documentos
* Pago de una única garantía o fianza

A continuación, se presentan cifras relativas a las alternativas a la detención aplicadas entre 2018 y 2021

| *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| --- | --- | --- | --- |
| 710 | 1 380 | 1 797 | 538 |

Órdenes de detención emitidas

| *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 259 | 490 | 31 |

No devolución y procedimientos de determinación de la condición de refugiado

67. Los migrantes recientemente llegados al país que residen en el Centro de Acogida Inicial son informados sobre el proceso de asilo y se les pregunta si desean solicitarlo. Prácticamente todos los migrantes rescatados en el mar solicitan protección internacional. Se permiten las visitas de abogados y ONG, incluido el ACNUR, al Centro de Acogida Inicial y a los centros cerrados para informar sobre el proceso.

68. Malta respeta el principio de no devolución de conformidad con sus obligaciones internacionales y las disposiciones de la Ley de Protección Internacional. Este principio se aplica a todos los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional. Por otro lado, la Agencia de Protección Internacional (creada en 2020) está tomando todas las medidas necesarias para garantizar que, en la medida de lo posible, las solicitudes se evalúen en un plazo razonable. Ello incluye el traslado a nuevos locales más adecuados para el desempeño de sus funciones, una mayor presencia de la Agencia de Protección Internacional en los Centros de Acogida Inicial y el incremento de recursos humanos, en consonancia con los planes de la Agencia. En total, se contrató a nueve personas adicionales en 2020 y 2021. Estas medidas han permitido:

* Eliminar el lapso de espera para la presentación de solicitudes de asilo.
* Eliminar el tiempo de espera entre la salida del centro de acogida inicial y la presentación de la solicitud de asilo. Las solicitudes se registran inmediatamente después de que los solicitantes de asilo sean trasladados del centro de acogida inicial a un centro abierto. La expedición de un documento de solicitante de asilo en una fase tan temprana está dando más estabilidad a los solicitantes de asilo, sobre todo a la hora de solicitar permisos de trabajo.

69. Cabe señalar asimismo que las solicitudes se evalúan de forma individual. Hay intérpretes disponibles a lo largo de todo el proceso de asilo y las decisiones se comunican por escrito en una lengua que entienda el solicitante de asilo.

Condiciones de vida en los centros de reclusión

70. A pesar de que Malta presenta el mayor número de inmigrantes irregulares per cápita de la UE, el Gobierno del país ha mantenido constantemente su compromiso de salvaguardar las normas mínimas de acogida humana y segura de los inmigrantes.

71. Se han tomado las siguientes medidas para garantizar un espacio personal adecuado para los detenidos y aliviar la presión de los centros cerrados:

a) Renovación de una sede abierta para migrantes en el Centro Abierto de Hal Far Hangar, que permitió aumentar su capacidad en 780 plazas y reducir drásticamente el número de migrantes en espera de alojamiento en la comunidad. La apertura de este centro alivió la presión que sufrían los centros de acogida iniciales;

b) Mayor eficiencia en la reubicación y los retornos para aliviar la presión inédita sufrida por el sistema de acogida maltés, incluido un nuevo plan de ayudas económicas para incentivar los retornos voluntarios;

c) Construcción de dos nuevos recintos en el centro de detención de Safi para reducir el hacinamiento; ambos entraron en funcionamiento en agosto de 2020 y junio de 2021 respectivamente. Los migrantes se alojan ahora teniendo en cuenta sus necesidades de protección;

d) Construcción de una clínica en el interior del centro de detención de Safi, que sirve como centro de salud. La clínica entró en funcionamiento en febrero de 2021 y permitió ofrecer una amplia gama de servicios sanitarios *in situ*. Los consultores visitantes están llevando a cabo revisiones especializadas internas, por ejemplo, para tratar la tuberculosis y enfermedades genitourinarias, dermatológicas u oftalmológicas;

e) A pesar de la continua presión migratoria, se ha llevado a cabo un ejercicio de renovación y mantenimiento a gran escala. Este proceso continuará hasta la renovación integral del centro de detención de Safi. Se han llevado a cabo ajustes para incluir iluminación de emergencia, nuevos acabados de los baños a prueba de actos vandálicos, ventanas y sistemas eléctricos más seguros, mejoras del sistema de alcantarillado e instalación de un nuevo sistema de cámaras de vigilancia en circuito cerrado, entre otros.

72. Otros esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida en los centros cerrados son:

a) Todos los recintos tienen acceso a zonas exteriores y de recreo durante el día. Hay libros, balones, naipes y juegos de mesa disponibles. Está previsto establecer un programa estructurado de educación y actividad física, que incluye formación en lengua inglesa, en fútbol profesional, en tecnologías de la información, en primeros auxilios y en otras competencias básicas para la vida;

b) En todas las secciones de los centros cerrados se permite la comunicación con el mundo exterior, en especial las llamadas internacionales a familiares. Se ha designado un nuevo espacio para mantener la privacidad de estas visitas con ONG, abogados y representantes de la comunidad;

c) Se ha creado un nuevo puesto de asistente social para garantizar un equilibrio adecuado entre seguridad y asistencia social. Se ha introducido un sistema de notificación para registrar incidentes en los centros cerrados, quejas de los detenidos y visitas de abogados, familiares y ONG;

d) Aumento de la inversión en recursos humanos en centros tanto abiertos como cerrados. No se trata únicamente de contratación de personal adicional sino también de formación del personal. Entre el nuevo personal se encuentran profesionales del ámbito del trabajo social, trabajadores de apoyo, oficiales de centros de acogida, asistentes psicológicos, asesores, asistentes sociales y psicólogos. El Servicio de Detención contrató a 106 nuevos agentes en 2020, lo que supuso prácticamente la duplicación de sus efectivos. El Organismo para el Bienestar de los Solicitantes de Asilo aumentó su personal de 89 en 2019 a 211 a finales de 2020. También está en marcha el proceso de contratación de personal adicional. El Servicio de Detención ya no recurre a agentes de seguridad privados;

e) Los directores espirituales llevan a cabo visitas regularmente. Durante estas visitas se distribuyen libros religiosos, alfombras para rezar y alimentos relacionados con las fiestas religiosas;

f) El Bloque Hermes, anteriormente utilizado como centro de detención, ha sido cerrado para llevar a cabo obras de mantenimiento y renovación.

El derecho a un juicio imparcial

73. En virtud del artículo 355AUA del Código Penal:

1) El sospechoso o acusado tendrá derecho a acceder a un abogado en plazos y de tal forma que pueda ejercer sus derechos de defensa de manera práctica y efectiva.

2) El sospechoso o acusado deberá tener acceso a un abogado sin dilaciones indebidas. En cualquier caso, el sospechoso o acusado accederá puntualmente a un abogado en todas las circunstancias siguientes:

a) antes de ser interrogados por la Policía Ejecutiva o CÓDIGO PENAL [cap. 9. 207 por otra autoridad policial o judicial en relación con la comisión de un delito;

b) cuando las autoridades de investigación u otras autoridades competentes procedan a investigar o buscar pruebas, de conformidad con el subartículo 8 e);

c) sin dilaciones indebidas tras la privación de la libertad;

d) cuando hayan sido citados ante un tribunal con jurisdicción penal, con la debida antelación.

Justicia juvenil

74. En la Ley del Tribunal de Menores de Malta, capítulo 287 de las Leyes de Malta, se define a un niño o joven como aquel que aún no ha cumplido los dieciséis (16) años de edad. Una característica destacable del sistema maltés es que la situación de los menores acusados en los procesos penales no difiere significativamente de la de los adultos. Así queda patente desde la fase previa al juicio, en la que invariablemente se informa a los sospechosos adultos o menores de su detención con un discurso comprensible y, si es necesario, con la ayuda de un intérprete. También deben ser llevados ante un juez en el mismo plazo: 48 horas a partir del momento de su arresto; de otro modo quedan en libertad. Por añadidura, son pocos los derechos especiales reconocidos a los menores durante el procedimiento penal. Por ejemplo, el derecho a la interpretación y a la traducción de todos los documentos pertinentes, incluidos los autos de acusación y las sentencias, en un plazo razonable, se aplica indistintamente a adultos y menores.

75. En la audiencia se adopta un enfoque diferente en función de la edad del menor. Según la Ley del Tribunal de Menores, los menores de 16 años acusados en un proceso están protegidos ex lege por esta institución, que excluye al público de las audiencias en que participen. En virtud del artículo 7 de la Ley del Tribunal de Menores, salvo en los casos en los que se obtenga el consentimiento del Tribunal de Menores, solo podrán asistir a la audiencia o a una sala adyacente los miembros del tribunal y de la fiscalía, las partes, sus abogados u otros abogados, los representantes del Ministerio correspondiente, los testigos o personas que tengan un interés directo en el caso, los padres, los familiares o los tutores del niño o los representantes acreditados de medios de comunicación. Por otro lado, se controla toda la cobertura informativa de estos procedimientos. Es fundamental que ninguna plataforma de medios de comunicación revele la identidad del niño o joven o propicie su revelación, a menos que el Tribunal de Menores o el Ministro estén convencidos de que resulta apropiado revelarla para evitar que un niño o joven sufra una injusticia.

76. Otros derechos consagrados en Malta son el derecho a permanecer en silencio, a consultar a cualquier médico disponible, a informar al menos a una persona del arresto o detención y a poder comunicarse con ella sin dilaciones indebidas. Lo mismo se aplica al detenido menor, con la salvedad de que, en su caso, la sanción y las razones que la motivan deberán ser puestas en conocimiento de al menos una persona que tenga la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda. En la misma línea, si bien el método de interrogatorio de sospechosos adultos se aplica también a menores, debe prestarse especial atención al interrogatorio de estos últimos. De ser posible, la entrevista se lleva a cabo en presencia de un progenitor, tutor o de otra persona del mismo sexo que el interrogado y que no sea miembro de la Fuerza de Policía, por ejemplo, de un trabajador social o de la persona a cargo del cuidado y la custodia efectivos del menor.

77. En Malta, además de la imposición de multas no privativas de libertad y de la posibilidad de poner por algún tiempo al acusado bajo la tutela de un agente de libertad vigilada, debe entregarse una copia de la orden de libertad vigilada al progenitor u otra persona responsable de la crianza del condenado si se trata de un menor de edad. En el caso de los jóvenes de entre 14 y 16 años que actúen con discernimiento malicioso y de los jóvenes de entre 16 y 18 años, la pena aplicable queda rebajada en uno o dos grados. Los menores de 16 años quedan eximidos de responsabilidad penal por cualquier acción u omisión que carezca de discernimiento malicioso.

78. La adopción de la Ley de Protección del Menor (Modalidades Alternativas de Cuidado) de 2020, capítulo 602 de las Leyes de Malta, actualiza la Ley del Niño y el Joven (Órdenes de Tutela) de 1980 (no todas las disposiciones están en vigor). Esta Ley aborda situaciones como la de los menores protegidos por una orden de tutela que terminan atrapados en el sistema hasta la mayoría de edad y ven cómo su futuro es revisado cada seis meses.

79. Las órdenes de tutela (también las de carácter correccional) pasaron de ser responsabilidad del ministro a ser responsabilidad de un Tribunal de Menores. Se establecieron tres alternativas a las órdenes de tutela (ahora llamadas “órdenes de protección”), para evitar que se convirtieran en una solución generalizada. Los niños implicados participarán ahora en todas las fases del proceso, con un Defensor del Niño que representará sus intereses. Para ofrecerles una mayor sensación de seguridad, no se requiere que declaren en la sala de audiencias del tribunal, sino que pueden hacerlo en un entorno más adecuado y sosegado.

80. Todos los profesionales que participen en el proceso reciben ahora formación especializada y la ley tipifica nuevos delitos para sancionar a quienes obstaculicen u obstruyan su labor o cometan actos violentos en su contra. Se establece un plazo para que el menor regrese con su familia natural, en tanto que otras enmiendas procuran brindar un sentido de permanencia y estabilidad cuando dicho regreso no es factible. La nueva Ley también introduce el derecho a recurrir en todas las fases del procedimiento.

Derecho de voto de las personas ciegas

81. Las personas ciegas o con deficiencia visual pueden solicitar una papeleta en braille en los colegios electorales, y la Comisión Electoral se encarga de mantener cierto número de estas papeletas disponibles a tal fin. También se ha modificado el diseño de las papeletas estándar, que ahora presentan una estructura más clara y un tipo de letra más grande. Además, se mantienen constantes debates internos en pos de un mayor acceso.

Libertad de expresión y libertad de conciencia y de religión

82. Se modificó el régimen jurídico relativo a la libertad de los medios de comunicación para mejorar la protección del derecho a la libertad de expresión de los periodistas y las empresas de comunicación en virtud de la promulgación, el 14 de mayo de 2018, de la Ley de Medios de Difusión y contra la Difamación (capítulo 579 de las Leyes de Malta). Por ejemplo, Malta despenalizó la calumnia en su sistema jurídico e introdujo en la Ley disposiciones contra las estrategias destinadas a multiplicar la interposición de acciones legales por calumnia esencialmente por los mismos motivos. Los artículos 163 y 164 del título IV del Código Penal relativos a los delitos contra los sentimientos religiosos, concretamente a la denigración, fueron suprimidos en virtud de la Ley núm. XXXVII de 2016.

Sección B

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones previa a la presentación del informe (CCPR/C/MLT/QPR/3)

83. Durante la fase de redacción, la legislación nacional es examinada con vistas a garantizar que se ajuste a las disposiciones que respetan y garantizan los derechos humanos fundamentales. Se imparte formación continua sobre la protección de los derechos humanos a la judicatura y a los fiscales.

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

84. Sírvanse consultar la información proporcionada en la sección A de la página 2.

Institución nacional de derechos humanos (art. 2)

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

85. El Gobierno ha redactado y presentado a la Cámara de Representantes dos proyectos de ley al respecto: el proyecto de ley 96, sobre la igualdad, y el proyecto de ley 97, sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad.

86. El proyecto de ley de igualdad refuerza el marco jurídico antidiscriminatorio de Malta, ya que consolida y eleva las disposiciones de igualdad y no discriminación, que actualmente se aplican de forma fragmentaria. El proyecto de ley también reúne todas las características actualmente protegidas por la legislación local e internacional, define la discriminación de forma amplia y garantiza la protección contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida.

87. El proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad establece la primera institución nacional de derechos humanos de Malta, de plena conformidad con los Principios de París.

88. Con respecto al proyecto de ley de igualdad y al proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, se llevaron a cabo tres consultas públicas. Primero se realizó la consulta preliminar, seguida por la consulta sobre el Libro Blanco, que propició la puesta en marcha de dos iniciativas legislativas: un proyecto de ley de igualdad, centrado en el cumplimiento de las normas más estrictas de igualdad y lucha contra la discriminación, y un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, que servirá para establecer la Comisión. Por otro lado, la última consulta pública sobre dichos proyectos de ley se llevó a cabo antes someterlos al Parlamento para su primera lectura. El objeto de estas últimas consultas era alentar aportaciones sobre cualquier cuestión relativa a los artículos de cualesquiera de los proyectos de ley y recabar observaciones sobre posibles adiciones o supresiones; así como escuchar las inquietudes sobre los proyectos de ley y ofrecer finalmente explicaciones concisas y formular propuestas alternativas.

89. Además de las consultas públicas, se llevó a cabo una consulta con partes interesadas en la que participaron expertos internacionales, interlocutores sociales, instituciones gubernamentales y actores de la sociedad civil. El objeto de esta consulta era desarrollar un marco jurídico sólido, que garantizara la igualdad y la protección efectiva frente a la discriminación en todas las esferas de la vida.

90. El proyecto de ley de igualdad está en fase de examen en comisión parlamentaria y el proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad se encuentra en espera de ser examinado en comisión parlamentaria.

Medidas de lucha contra la corrupción (arts. 2 y 25)

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

91. Se estableció un departamento de investigación de delitos financieros en la Fuerza de Policía y se llevó a cabo un amplio proceso de contratación de personal en 2020.

92. A partir del 18 de diciembre de 2019, la Fiscalía General pasó a desempeñarse exclusivamente como servicio fiscal (la función de asesoramiento del Fiscal General fue transferida al Abogado del Estado). En 2020, la Fiscalía General abrió un extenso proceso de contratación y el número de fiscales pasó de 16 a 33. Esta circunstancia propició que la Fiscalía General tomara el relevo de la policía persiguiendo delitos graves como la corrupción, el blanqueo de dinero y homicidios dolosos. La Fiscalía General y la Policía elaboraron unos procedimientos operativos estándar en pos de una transición fluida de las funciones fiscales encomendadas a la Fiscalía General. Del 1 de octubre de 2020 (fecha en la que la Fiscalía General asumió la decisión de perseguir y procesar delitos graves) al 14 de mayo de 2021, la Fiscalía General incoó 32 procesos, 24 de ellos relacionados con delitos de blanqueo de capitales, 3 con homicidios dolosos, 4 con tentativas de homicidio y 1 con una tentativa de soborno. Entre las personas procesadas, hay un ex PEP.

93. Los fiscales de la Fiscalía General se repartían entre cuatro unidades (unidad de litigios, unidad de asistencia internacional y recíproca, unidad de investigación preliminar “in genere” y unidad de Asuntos relativos a la UE) y los fiscales de la unidad de litigios se dividían en secciones correspondientes a distintos delitos. En la actualidad, 13 fiscales se encargan de delitos económicos y esta división del trabajo está permitiendo garantizar la especialización de los fiscales. Se organizan seminarios web y cursos internos de capacitación para impartir formación continua a los fiscales. En la Fiscalía General se celebran periódicamente sesiones informativas.

94. El método de designación de los miembros del poder judicial fue modificado drásticamente mediante enmiendas constitucionales promulgadas en 2020. Estas prevén la publicación de una convocatoria pública en caso de vacante de las funciones de juez o magistrado y establecen una lista de requisitos objetivos. Por otro lado, los miembros del poder judicial serán nombrados por el Presidente exclusivamente entre los tres candidatos que le presente la Comisión de Nombramientos Judiciales. El Presidente del Tribunal Supremo será designado mediante un proceso parlamentario que requerirá la aprobación de dos tercios de los miembros de la Cámara de Representantes. En caso de que no se logre dicha mayoría, el Presidente del Tribunal Supremo en funciones permanecerá en el cargo hasta que se logre dicha mayoría.

95. En junio de 2020 se designó un nuevo comisario de policía con arreglo al nuevo procedimiento establecido en la ley revisada. El método de designación del comisario de policía ha sido revisado para atender la recomendación de la Comisión de Venecia. A tal fin, se enmendó la Ley de Policía (capítulo 164 de las Leyes de Malta), así como la Constitución de Malta. Estas enmiendas se aprobaron en virtud de la Ley núm. XIX de 2020. El artículo 6, párrafo 2, de la Ley de Policía (capítulo 164 de las Leyes de Malta) establece el procedimiento a seguir en caso de vacante en el cargo de comisario de policía. En primer lugar, la Comisión de Administración Pública debe abrir una convocatoria pública de candidaturas, supeditadas al cumplimiento de los requisitos de titulación y experiencia. A continuación, incumbe a la Comisión de Administración Pública evaluar las solicitudes y elaborar una lista de preselección con los nombres de los dos candidatos considerados más aptos. La Comisión de Administración Pública remite entonces esta lista de candidatos al Consejo de Ministros. Este examina ambas candidaturas y designa al más idóneo para una audiencia ante la Comisión de Nombramientos Públicos del Parlamento. Si este Comité se pronuncia a favor de la designación del candidato seleccionado, este es designado por el Primer Ministro, previa consulta con la Comisión de Administración Pública. El actual comisario fue nombrado en junio de 2020, con arreglo a este nuevo procedimiento.

96. Posteriormente, la Fuerza de Policía de Malta puso en marcha su Estrategia de Transformación para los años 2020-2025. Los resultados proyectados son los siguientes: i) aumento de la confianza, la seguridad, la legitimidad y la capacidad de respuesta, externamente desde el punto de vista de la comunidad e internamente desde la perspectiva de los agentes y el personal de policía; ii) transformación de la actual organización de policía en una fuerza de policía moderna, flexible, eficiente, que se guíe por la gestión de datos, esté enfocada en la comunidad y se centre en la obtención de resultados; y iii) innovación y mantenimiento de los cambios positivos resultantes de la reforma mediante prácticas de liderazgo y gestión eficaces y eficientes.

97. Se han identificado 11 objetivos estratégicos basados en los 3 resultados proyectados. Los objetivos estratégicos clave más pertinentes en relación con el ámbito de aplicación material del Mecanismo del Estado de Derecho de la Comisión Europea y las reformas institucionales generales que se están llevando a cabo en Malta son los siguientes:

a) Comunicarse con el público de forma clara, coherente y transparente. Esto se lograría celebrando consultas frecuentes y abiertas con los organismos de interés público, organizando sesiones informativas periódicas para la prensa, escuchando las opiniones del público sobre el servicio prestado por la policía, etc.;

b) Rendir cuentas en todo momento. Para alcanzar este objetivo se elaborarían metas de desempeño interno, se publicarían indicadores clave sobre el desempeño de la Fuerza y se aplicarían medidas operativas de auditoría interna y control de calidad;

c) Reforzar las medidas de lucha contra la corrupción y las salvaguardias. Esto se lograría ejerciendo un control constante sobre los agentes de policía, ofreciendo una protección adecuada a los denunciantes de irregularidades y sometiendo periódicamente al personal a pruebas de drogas.

98. La Estrategia de Transformación se aplicará bajo la supervisión del Consejo de Gobernadores para garantizar resultados concretos. Se recurrió a fondos de la UE para esta Estrategia con el fin de añadir también un nivel de control de la Comisión Europea.

99. Se ha introducido una política de lucha contra el fraude y la corrupción que proporciona un marco para identificar y prevenir la corrupción en el seno de la Fuerza de Policía. Esta política ayuda a los agentes y a sus supervisores a superar con éxito las pruebas. También define la corrupción y el fraude en el contexto policial. Proporciona un marco para identificar y prevenir la corrupción y detalla las medidas que toda persona debe tomar si sospecha que sus compañeros han incurrido en actos de corrupción o de fraude.

100. También se ha establecido un Código Ético revisado, arraigado en la forma de pensar y de actuar cotidiana. El nuevo Código Ético supone una oportunidad para que el Cuerpo se revitalice y se centre en mejorar los niveles de confianza que inspira la policía. Este documento vincula a todos los funcionarios jurados de la Fuerza, desde el comisario hasta el agente de a pie, y establece las normas de conducta que permiten adoptar las decisiones más correctas. Por otro lado, el Código describe los valores que deben guiar los principios de la labor policial y hace hincapié en el tratamiento adecuado de las diversas partes interesadas, incluidas las víctimas de delitos, los testigos, los autores de delitos, los abogados defensores, el poder judicial y los medios de comunicación.

101. El nuevo Código Ético mejorará las prestaciones de la policía y establecerá un enfoque práctico y un modelo de referencia en términos de calidad y coherencia, con vistas a ayudar a la Fuerza de Policía a ganarse la confianza de los ciudadanos mostrando mayor transparencia y responsabilidad. El Código será un documento vivo que será examinado al menos cada cinco años y revisado cuando sea preciso.

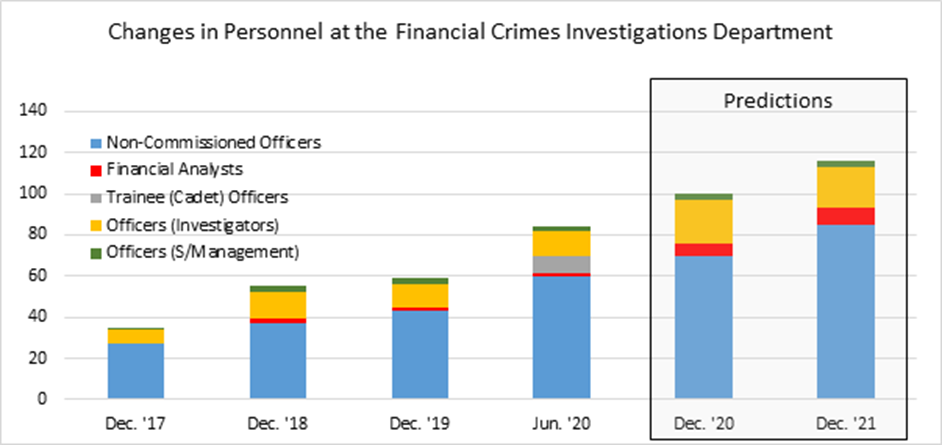
102. Por otro lado, el 25 de noviembre de 2020 se puso en marcha una Política de Intereses Comerciales y Ocupaciones Adicionales que establece un marco que impedirá la aparición de conflictos de intereses a raíz de actividades paralelas.

103. La reforma del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Policía de Malta avanza según lo previsto, con la aportación de personal y formación adicionales para atender las demandas planteadas en este sector.

104. Desde el 1 de junio de 2020, el personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros está compuesto por:

* Un subcomisario, que se desempeña como jefe de departamento, asistido por un superintendente que dirige las brigadas de delitos económicos y de lucha contra el blanqueo de capitales. Está en marcha el proceso de selección de nuevos superintendentes de la policía maltesa.
* Hay ocho investigadores asignados a la Brigada de Delitos Económicos y cuatro a la Brigada de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. El Departamento está formando actualmente a nueve oficiales cadetes, que serán ascendidos a inspectores dentro de unos meses, una vez que hayan recibido la formación académica necesaria. Ocho de estos cadetes serán asignados a la Brigada de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y uno a la Brigada de Delitos Económicos.
* El Departamento cuenta actualmente con un analista financiero a tiempo completo. En los próximos días se publicarán convocatorias de empleo para otros cinco analistas.
* Sesenta suboficiales (agentes y sargentos de policía) prestan asistencia en el marco de la labor diaria del Departamento.

105. El siguiente gráfico ilustra los cambios de personal y las previsiones hasta finales de diciembre de 2021.



No discriminación (arts. 2, 20 y 26)

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

106. El proyecto de ley de igualdad, que se debate actualmente en el Parlamento, refuerza el marco jurídico de lucha contra la discriminación de Malta, ya que unifica y refuerza las disposiciones en materia de igualdad y no discriminación, aplicadas hasta la fecha de forma fragmentaria. También reúne todas las características actualmente protegidas por la legislación local e internacional, define la discriminación de forma amplia y garantiza la protección contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida. Entre otras características protegidas, el proyecto de ley de igualdad propone la lengua, definida como “cualquier lengua hablada, escrita o de señas oficialmente reconocida por ley”.

107. El Gobierno ha emprendido una constante actividad legislativa con el fin de modificar o derogar, según los casos, las disposiciones incompatibles con el principio de no discriminación. En diciembre de 2020, por ejemplo, el Gobierno derogó las cláusulas que obligaban únicamente a las mujeres a especificar su estado civil en las escrituras notariales.

108. El Gobierno está actualmente en las fases finales de redacción del primer Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia (NAPRAX) de Malta. Sus objetivos son: i) afrontar y eliminar el racismo en todas sus formas a nivel individual, sistémico y social; y ii) estimular y apoyar la inclusión intercultural. Tras una fructífera consulta pública celebrada en 2020, se redactó un proyecto de documento final. El proceso de redacción incluyó importantes consultas con expertos del Consejo de Europa. Actualmente se están mejorando algunas de las medidas y se prevé presentar el Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en los próximos meses con vistas a su aprobación definitiva.

109. La Unidad de Delitos de Odio fue creada para lidiar con el problema de los delitos y el discurso de odio en Malta, así como para apoyar a las víctimas prestándoles servicios terapéuticos y jurídicos gratuitos. El equipo está formado por el jefe de unidad, un subjefe de la unidad terapéutica, cuatro asistentes terapéuticos y un jurista especializado en la legislación sobre los delitos de odio. La unidad ofrece un servicio multidisciplinar y remite a las víctimas a servicios internos y externos, tras examinar caso por caso, además de dar asistencia jurídica gratuita. También recopila estadísticas y consigna los delitos de odio y los discursos de odio denunciados a la Unidad, lleva a cabo investigaciones sobre el tema e imparte educación y capacitación tanto al público general como a profesionales.

110. La finalidad del proyecto de ley de igualdad es prohibir la discriminación en diversos ámbitos de la vida, promover la igualdad y prevenir la discriminación, incorporar las disposiciones de la Directiva 2000/43/CE del Consejo de la Unión Europea, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, la Comunicación de la Comisión Europea (22.12.2011 C (2011) 9497), que contiene las Directrices sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo a los seguros, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-236/09 (Test-Achats), la Directiva 2006/54/EC del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), la Directiva 2010/41/UE del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo, así como derogar el capítulo 456 de las Leyes de Malta y sus leyes subsidiarias.

111. El proyecto de ley prevé la creación de un organismo denominado Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, en consonancia con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (los Principios de París) y la legislación de la Unión Europea en materia de igualdad, encargado de promover y proteger los derechos humanos, en particular el derecho a la igualdad de trato, incluido el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en Malta; la disolución de la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad de Hombres y Mujeres y la atribución de sus funciones a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, así como la adopción de disposiciones sobre cuestiones conexas o afines.

112. Una vez adoptado, el nuevo proyecto de ley de igualdad, que está siendo debatido en el Parlamento maltés, extenderá la prohibición de la discriminación e impondrá a los centros educativos la obligación de “promover la diversidad y el respeto hacia todas las personas, prestando especial atención a la diversidad y a las combinaciones particulares de características protegidas”, y a los empresarios la obligación de “aplicar las políticas, normas o directrices sobre igualdad, igualdad de trato y no discriminación que sean necesarias”. Por otro lado, el nuevo proyecto de ley de igualdad impondrá un deber de igualdad aún más marcado a la administración pública, que quedará obligada a “garantizar la integración de la igualdad en la formulación y aplicación de leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, políticas y actividades en todos los ámbitos”.

113. Una de las herramientas a las que recurre la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad, a lo largo del año, con vistas a cumplir su cometido, especialmente en el ámbito de la lucha contra la discriminación, son las campañas de sensibilización. La Comisión usa sus plataformas de redes sociales, organiza y participa en conferencias, aparece en cadenas locales de radio y televisión, publica comunicados de prensa y lleva a cabo diversos proyectos en el marco de estas campañas.

114. En lo que respecta a las personas con discapacidad, Malta elaboró el proyecto de ley sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2021, y el proyecto de ley de igualdad de oportunidades (personas con discapacidad) (enmienda), 2021, con vistas a una consulta pública en mayo de 2021. El primero permitirá aplicar los artículos sustantivos de la Convención en el marco jurídico nacional, aportará un fundamento jurídico al coordinador nacional y al mecanismo de coordinación nacional y establecerá un mecanismo de participación de la sociedad civil. El segundo establece un Panel de Reparación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad encargado de tratar las reclamaciones por discriminación relacionadas con los artículos sustantivos de la Convención, consolida otras vías de reparación ya existentes y establece una base jurídica estructurada para las funciones de investigación, cumplimiento y aplicación del regulador maltés en asuntos de discapacidad.

Discriminación contra las personas LGBT

115. 2015: se aprueba la Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, que reconoce el derecho al reconocimiento de la propia identidad de género y el derecho a la integridad corporal y la autonomía física (Ley XI de 2015).

* La Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales ha sido posteriormente enmendada en tres ocasiones:
* La primera enmienda garantiza que las disposiciones de la Ley se apliquen plenamente a las personas adoptadas (Ley núm. XX de 2015).
* La segunda hace extensivos los efectos de la Ley a las personas detenidas (independientemente de su nacionalidad) y suprime la patologización de todas las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género (Ley núm. LVI de 2016).
* La tercera iguala las penas aplicables a la mutilación genital intersexual con las penas aplicables a la mutilación genital femenina (Ley núm. XIII de 2018).

116. 2015: se puso en marcha la Política de Estudiantes Trans, de Género Variante e Intersexuales en las Escuelas, que establece directrices sobre cómo aplicar las disposiciones de la Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales en las escuelas.

117. 2015: adopción del Plan de Acción LGBTIQ 2015-2017.

118. 2016: se promulgó la Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género a fin de acabar con las prácticas de conversión perjudiciales y afirmar que todas las sexualidades y géneros son iguales ante la ley (Ley núm. LV de 2016).

119. 2017: se introdujo la Ley de Matrimonio y otras Leyes (Enmienda) con el fin de eliminar toda distinción entre parejas de distinto sexo y del mismo sexo ante la ley (Ley núm. XXIII de 2017). Una notificación legal introdujo el derecho a convertir las uniones civiles en matrimonios (LN núm. 382 de 2017).

120. 2017: una notificación legal introdujo el permiso de fecundación in vitro para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual. Fue nuevamente enmendada en 2020 (Notificación Legal 156 de 2017, enmendada por la Ley núm. XXIV de 2018; Notificación Legal 263 de 2020).

121. 2017: se introdujo el distintivo “X” como opción alternativa a “H” o “M” en los documentos de identidad y los pasaportes.

122. 2018: una notificación legal introdujo las “condiciones relacionadas con la identidad de género y las características sexuales” en la lista de derechos del Servicio Nacional de Salud (Notificación Legal 44 de 2018). Posteriormente se abrió un proceso de consultas destinado a mejorar los servicios de salud en estos contextos. La Clínica de Bienestar de Género comenzó a prestar servicios sanitarios específicos a personas trans en noviembre de 2018.

123. 2018: la Ley de Protección del Embrión fue enmendada. Se reformuló el concepto de “futuros progenitores”, se suprimió cualquier exclusión discriminatoria relacionada con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, y se contemplaron las donaciones de terceros (Ley núm. XXIV de 2018).

124. 2018: se modificó el Sistema Nacional de Policía para facilitar la detección y notificación de los delitos de odio cuando se denuncian estos incidentes. Varios agentes de policía completaron el programa de capacitación de instructores y formación para luchar contra los delitos de odio con miras a la aplicación de la ley (TAHCLE) organizado por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y han formado desde entonces a más de 800 agentes de policía.

125. 2018: adopción de la Estrategia y Plan de Acción para la Igualdad LGBTIQ 2018‑2022.

126. 2018: creación de la Unidad de Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales en el marco de la Dirección de Derechos Humanos encargada de supervisar la aplicación de la Estrategia y Plan de Acción para la Igualdad LGBTIQ 2018-2022. Cada año se publica un informe sobre los progresos realizados y la labor llevada a cabo por esta unidad con ocasión de una conferencia pública.

127. 2020: la Ley de Enmienda del Código Civil y Otras Leyes Diversas introdujo varias disposiciones con vistas a (Ley núm. LXV de 2020):

* Utilizar, en la medida de lo posible, terminología de género inclusiva.
* Permitir el cambio del sexo que figura en el registro civil para reflejar la identidad de género de cada persona, según lo dispuesto en la “Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales” − cap. 540 de las Leyes de Malta.
* Garantizar que las disposiciones que rigen el matrimonio civil se apliquen asimismo a la unión civil.

128. 2020: se modificó el Reglamento de Normas Procesales para el Examen de las Solicitudes de Reconocimiento de la Condición de Refugiado con vistas a incorporar asimismo la consideración de la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales (Notificación Legal 416 de 2015, modificada por la Ley núm. XL de 2020).

129. También en 2020, la Agencia de Protección Internacional (creada ese mismo año para mejorar el proceso de examen de las solicitudes de protección internacional de conformidad con la legislación maltesa) adoptó unas directrices internas destinadas a los funcionarios encargados de tramitar reclamaciones relacionadas con la Unidad de Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.

130. En abril de 2020, la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad comenzó a trabajar en el proyecto Empowerment for Diversity (E4D). El objetivo del proyecto es abordar el impacto social y cultural provocado por la promulgación de las leyes que se han aprobado en los últimos cinco años, en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

131. Desde 2020, las denuncias sobre el discurso de odio en línea son investigadas por la Brigada Antivicio, rama especializada de la Fuerza de Policía. Anteriormente, este delito era investigado y perseguido por la policía de división.

Igualdad de género (arts. 2, 3 y 25)

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

132. La integración de la perspectiva de género se convirtió en la política oficial del Estado en junio de 2000. La circular de la Oficina del Primer Ministro núm. 15/2012 confirmó esta política en 2012. El objetivo de esta política era garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas y prácticas, así como producir un informe anual general sobre lo que ocurre en todos los departamentos y entidades gubernamentales en relación con la integración de la perspectiva de género. Todos los departamentos y entidades deben preparar un informe sobre las medidas adoptadas y los avances logrados en el ámbito de la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género. Este informe anual se remite entonces a la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad con una sinopsis que también se incorpora al informe anual del departamento.

133. El proyecto de ley de igualdad establece que, una vez promulgado, al menos el 40 % de los nombramientos de los organismos oficiales deben ser mujeres.

134. Si bien ninguna de las disposiciones del proyecto de ley de igualdad menciona directamente los “estereotipos”, este abarca la promoción de la igualdad, lo que implica un esfuerzo activo por evitar los estereotipos y superar los roles de género tradicionales.

135. En 2019, se presentó al Parlamento un informe sobre el equilibrio de género en el marco de la reforma del Parlamento que incluía recomendaciones para tratar el problema de la escasa representación de las mujeres en el Parlamento. En febrero de 2020, el Excmo. Primer Ministro, Dr. Abela, reafirmó la determinación del Gobierno de lograr una representación equilibrada entre hombres y mujeres, no solo en el Parlamento, sino también en puestos directivos y gubernamentales. Por otro lado, el mecanismo de paridad de género, identificado en el informe de la reforma de 2019, permitiría aumentar la representación femenina en el Parlamento. Es importante señalar que se llegó a un acuerdo con la oposición sobre dichas propuestas. De hecho, la Ley núm. XX de 2020 fue aprobada con éxito por el Parlamento y el mecanismo que garantizará que al menos el 40 % de los representantes en la Cámara sean mujeres se promulgará en las próximas elecciones generales.

136. En abril de 2021, el Parlamento maltés aprobó el proyecto de ley de la Constitución de Malta y varias leyes (enmienda) para enmendar la constitución e introducir medidas positivas temporales, necesarias y razonables en una sociedad democrática en pos de la igualdad de hecho entre hombres y mujeres en la política. También enmendó la Ley sobre las Elecciones Generales con vistas a incrementar el número de comisiones electorales y a garantizar la igualdad de representación entre sexos.

137. En 2020, la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad finalizó un proyecto, cofinanciado por la UE, denominado “Preparar el terreno para la independencia económica”, que había abordado las brechas de género existentes a lo largo del ciclo vital. Se ha creado e incorporado al Sello de Igualdad una herramienta de igualdad salarial, la primera de esta naturaleza en el país. Se trata de una base de referencia para seguir mejorando. La herramienta de igualdad salarial fue creada en el marco de la certificación del sello de igualdad, de modo que la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad está preparada para hacer lo mismo y mantener el sello de igualdad renovado más allá del ciclo de vida del proyecto. Cuando las organizaciones y empresas opten por usar esta herramienta y certificarse en materia de igualdad salarial, se generará un entorno de trabajo concienciado sobre la cuestión de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, lo que contribuirá a impulsar la independencia económica en condiciones de igualdad y generará un impacto socioeconómico en la sociedad.

138. En 2015, la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad finalizó su proyecto de promoción del equilibrio de género en la toma de decisiones, cuyo objetivo era aumentar el número de mujeres en puestos de decisión; empoderar y habilitar a las mujeres para que ocupen puestos de decisión; y apoyar y asesorar concretamente a los responsables políticos sobre el equilibrio de género en la toma de decisiones. Contribuyeron a alcanzar los objetivos mencionados: dos estudios de investigación, una representación de género equilibrada en los puestos de adopción de decisiones y cuotas de género y otras medidas en pos de una representación de género equilibrada en los puestos de adopción de decisiones, que todavía pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad; un programa de tutoría; y el Directorio de Mujeres Profesionales creado por la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad en el marco de este proyecto y que tiene como objetivo dar más visibilidad y oportunidades a mujeres profesionales y competentes con vistas a su nombramiento en consejos y comités y/o a asumir funciones de toma de decisiones en el mercado laboral.

139. Para incentivar a los hombres a incrementar su cuota de responsabilidades familiares y romper con los roles y estereotipos tradicionales, en noviembre de 2016 se otorgaron cinco días de permiso de paternidad remunerado a los empleados del sector público, un aumento de tres días.

140. Desde 2014, los padres que trabajan o estudian vienen accediendo a guarderías gratuitas de buena calidad, lo que se ha traducido en un incremento de la participación femenina en el mercado laboral a tiempo completo, así como en una mayor representación femenina en puestos directivos.

141. El empleo femenino en Malta, para el grupo de edad de 20 a 64 años, ha aumentado del 55,3 % en 2015 al 68 % en 2020. Por otro lado, las mujeres representaban en 2020 el 9,9 % de los empleados de las mayores empresas cotizadas, como presidentas, consejeras o representantes de los trabajadores, frente al 4,5 % de 2015. Las estadísticas mencionadas reafirman que las medidas favorables a la familia y la igualdad entre mujeres y hombres en el reparto de las responsabilidades familiares y del hogar fomentan y generan igualdad de oportunidades, favoreciendo el desarrollo y la progresión profesional de las mujeres.

142. Desde 2010, la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad (Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad) concede la certificación del Sello de Igualdad a las organizaciones que acreditan un compromiso activo con la igualdad entre mujeres y hombres y con las personas con responsabilidades familiares en el lugar de trabajo. El Sello de Igualdad, así como la certificación y la recertificación, se basan en la adhesión a los siguientes principios:

* Políticas e iniciativas, en particular la política de igualdad y la política de acoso sexual en consonancia con la legislación pertinente.
* La contratación y los nombramientos se basan en los principios de igualdad de oportunidades, garantizan la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y garantizan que los perfiles de la fuerza de trabajo y las descripciones de los puestos sean neutros desde el punto de vista del género y que las funciones estén libres de estereotipos de género.
* La empresa debe responsabilizarse de que se nombre un representante de los trabajadores para la igualdad y/o un comité de igualdad.
* Garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo profesional y personal.
* Adoptar medidas que favorezcan los intereses de empleados y empleadas con responsabilidades familiares.
* Velar por la igualdad del acceso a bienes y servicios y su oferta.

143. Cabe mencionar estas otras iniciativas emprendidas en este ámbito:

* La creación de la Unidad de Incorporación de la Perspectiva de Género, en el marco de la Dirección de Derechos Humanos, órgano de coordinación del Gobierno encargada de aportar la perspectiva de género a los procesos en curso.
* La creación del Consejo Consultivo de Derechos de la Mujer, órgano consultivo encargado de mejorar el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil.
* El desarrollo de los primeros estrategia nacional y plan de acción sobre la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género, que se prevé poner en marcha a finales de 2021. Este documento pretende reforzar la integración de la perspectiva de género en todas las etapas y diversos sectores encargados de la elaboración de políticas, comprometiendo al Gobierno a adoptar medidas directas y específicas en pos de la plena igualdad de género.
* Un proyecto de ley sobre el equilibrio de género en el Parlamento, que propone un mecanismo de corrección de género, introducirá medidas positivas temporales que son necesarias en una sociedad democrática para garantizar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres en la política. Por otro lado, se ha aprobado una enmienda de la Ley Electoral General destinada a incrementar el número de comisiones electorales y garantizar la igualdad de representación de ambos sexos.
* Modificaciones del régimen de apellidos en el matrimonio en virtud de la Ley de Igualdad Matrimonial, que introduce un nuevo régimen de igualdad de género destinado a eliminar la disparidad entre maridos y esposas en relación con la elección de los apellidos.
* Durante la Presidencia maltesa de la UE, en 2017, se organizó una reunión de alto nivel sobre la Integración de la Perspectiva de Género, centrada especialmente en el avance de la independencia económica de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de género y los derechos de la mujer en todo el mundo.
* Malta ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer durante el 63er período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
* En 2016 se introdujo la autorización, importación y distribución de anticonceptivos de emergencia sin receta médica.
* En 2018 se introdujo el tratamiento de fecundación in vitro en el sistema nacional de salud, tanto a nivel individual como de pareja.
* El grupo focal sobre las mujeres en las tecnologías de la información y las comunicaciones, creado en el marco de la Fundación eSkills Malta, debate cuestiones de género en el contexto de las TIC y del emprendimiento digital, lleva a cabo iniciativas destinadas a promover las competencias y los conocimientos digitales de niñas y mujeres, y realiza estudios sobre el equilibrio de género en el sector digital.
* Introducido en 2014, el régimen de reducción de las prestaciones ofrece apoyo a las personas que se incorporan al mercado laboral después de haber recibido ayudas al desempleo, asistencia social o prestaciones para familias monoparentales.
* En 2015 se creó el Fondo Fiduciario de Permiso de Maternidad, en el que cada empleador paga una contribución mínima por cada empleado, independientemente de su sexo.
* La Dirección de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad organizan diversas campañas de sensibilización sobre estereotipos, sexismo, igualdad, CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), etc.

Violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica (arts. 2, 3, 6, 7 y 26)

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

144. Se tomaron las siguientes medidas:

* La ratificación y la incorporación plena del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) a la legislación nacional en 2014.
* La creación de la Comisión de Violencia de Género y Violencia Doméstica, así como relevantes enmiendas del derecho penal maltés (Ley de Violencia de Género y Violencia Doméstica), tiene como objetivo que se haga justicia para las víctimas de la violencia, ofrecerles mayor protección y adoptar medidas preventivas contra la violencia.
* La introducción de los primeros Estrategia y Plan de Acción contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica (Visión 2020), en consonancia plena con la Ley de Violencia de Género y la Violencia Doméstica y el Convenio de Estambul. Se prevé que el plan de acción se ponga en marcha en 2021. La segunda estrategia de Malta sobre la violencia de género y la violencia doméstica se puso en marcha en junio de 2021. Se basa en los cuatro pilares del Convenio de Estambul: prevención, protección, persecución y políticas integradas. También tiene como objetivo aplicar las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO).

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

145. En abril de 2020 el Organismo de Asistencia Letrada de Malta puso en marcha un servicio de asesoramiento jurídico destinado a las víctimas de la violencia doméstica que funciona las 24 horas del día y contrató a abogados especialmente formados a tal fin. El servicio también ha sido ampliado hasta cubrir las 24 horas del día. El Organismo de Asistencia Letrada ha elaborado, en colaboración con la Unidad de Apoyo a las Víctimas de la Policía y la Aġenzija Appoġġ, procedimientos operativos estándar, que han sido puestos en práctica para garantizar la prestación de servicios profesionales estándar en todas las entidades pertinentes.

146. La Unidad de Apoyo a las Víctimas de la Policía es una oficina centralizada que investiga casos de violencia de género. Todos sus agentes están especializados y reciben formación en ese tipo de delitos, lo que se traduce en una mayor tranquilidad y comodidad de las víctimas a la hora de presentar denuncias. Se ofrece transporte a las víctimas que carecen de medios para desplazarse hasta la Jefatura de Policía para presentar denuncia. También se les ofrece apoyo emocional.

147. Por otro lado, estas tres entidades han plasmado estos procedimientos operativos estándar en un memorando de entendimiento, firmado el 14 de septiembre de 2020 en presencia de los respectivos ministros. A las personas que acuden o son derivadas al Organismo de Asistencia Letrada de Malta por cuestiones de violencia doméstica se les asigna inmediatamente un abogado de oficio para que las asesore gratuitamente sobre su situación y, de ser necesario, se las deriva a otras entidades pertinentes. El Organismo se esforzará por seguir prestando asistencia jurídica gratuita a las víctimas de la violencia contra las mujeres, los niños y las personas vulnerables, con el fin de cumplir todas las disposiciones consagradas en el Convenio de Estambul y ratificadas en el capítulo 581 de las Leyes de Malta.

Interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos (arts. 6 a 8)

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

148. Sírvanse consultar la información presentada en la sección A, en la página 5.

149. Por otro lado, el Ministerio de Salud ofrece una serie de servicios gratuitos de salud sexual y reproductiva. Entre ellos figuran los servicios de planificación familiar, maternidad sin riesgo, tratamiento para la esterilidad, reproducción asistida, servicios transgénero, prevención, pruebas de carácter confidencial, diagnóstico y tratamiento de infecciones del aparato reproductor, infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, así como prevención y tratamiento del cáncer del sistema reproductor y la morbilidad materna. Por otro lado, los anticonceptivos son fácilmente accesibles en las farmacias comunitarias. En 2017 se introdujeron las pruebas rápidas del VIH en la Clínica de Medicina Urogenital. Ese mismo año, Malta autorizó la venta libre de la píldora del día después. Para más información sobre los servicios de salud sexual prestados por la Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades − Ministerio de Salud, puede acceder al siguiente enlace: <https://sexualhealth.gov.mt/>. También puede consultar la plataforma de medios sociales del Organismo de Salud Sexual de Malta (Sexual Health Malta) en [https://www.facebook.com/  
Sexual-Health-Malta-102604634651092](https://www.facebook.com/Sexual-Health-Malta-102604634651092), [https://www.instagram.com/sexualhealthmalta/](https://www.instagram.com/sexualhealthmalta/,y) y <https://twitter.com/SexualHealthMT>.

150. El Ministerio de Salud trabaja en colaboración con el Ministerio de Educación y organiza campañas de educación sexual para la profesión docente, como por ejemplo la campaña sobre educación en sexualidad y relaciones, a la que alude la siguiente página web de la Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades: <https://deputyprimeminister.gov.mt/en/healthpromotion/Pages/campaigns/2015/sexuality-and-relationship-education.aspx>.

Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y trato dispensado a las personas privadas de libertad (arts. 7 y 10)

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

151. Remitimos a la información aportada en la sección A, páginas 6, 12 y 13, y a la siguiente pregunta, en la página 26.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

152. Todos los migrantes tienen derecho a recibir asistencia médica y servicios de urgencia gratuitos a su llegada. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha planteado retos sin precedentes al sistema nacional de salud pública, así como a la población migrante. Durante la pandemia se estableció un área de aislamiento próxima a uno de los centros de detención abiertos para dar atención médica a los migrantes que dieran positivo en la prueba de COVID‑19. Un equipo médico supervisa estrechamente a los pacientes de este centro, por si su estado empeora. Por otro lado, se llevan a cabo sistemáticamente hisopados a los residentes de los centros. Los pacientes con COVID-19 reciben raciones adicionales de fruta y verdura para reforzar su propio sistema inmunitario. Los migrantes reciben información en sus respectivos idiomas gracias a las traducciones llevadas a cabo por ONG.

Agencia de Servicios Corradino

153. Durante la pandemia, la Agencia de Servicios Penitenciarios adoptó medidas de mitigación médica calcadas de las aplicadas en el espacio público.

1. Identificación rápida de los casos positivos

154. Gracias a la fuerte inversión en pruebas rápidas de antígenos certificadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la OMS, la Agencia de Servicios Penitenciarios ha logrado, en los últimos ocho meses, obtener resultados inmediatos de los análisis de COVID-19 practicados a todos los nuevos reclusos del centro penitenciario. A su vez, cada persona que presente síntomas puede ser sometida de inmediato a un hisopado. Desde el inicio de la pandemia se han realizado más de 2.000 pruebas rápidas de antígenos en el centro. La Agencia de Servicios Penitenciarios ya es oficialmente un centro acreditado de pruebas rápidas de antígenos mediante hisopado, y cuenta con la certificación de las autoridades de salud pública maltesas. Desde el inicio de la pandemia se han llevado a cabo más de 4.000 pruebas PCR de COVID-19. Todos los datos se transmiten al servidor de salud pública de Malta.

2. Aislamiento temprano de los casos positivos y de alto riesgo de COVID-19

155. Si cuando un nuevo recluso da positivo a su llegada al centro penitenciario, es enviado de inmediato a una sala de aislamiento, donde permanece en cuarentena y en observación médica. Las personas que ingresan en el centro con un resultado de antígenos rápido COVID‑19 positivo no siguen el protocolo de ingreso rutinario. El objetivo en estos casos es el aislamiento rápido para evitar la transmisión local a otros reclusos y al personal.

3. Evaluación clínica continua de los casos positivos y de alto riesgo

156. Los parámetros de los reclusos diagnosticados con COVID-19 mediante pruebas rápidas de antígenos o PCR son controlados al menos dos veces por día durante la cuarentena. Se controla su saturación de oxígeno en sangre, su presión arterial, su pulso y su temperatura. Clínicamente, su función respiratoria se observa mediante mediciones de flujo máximo y auscultación del tórax. En la eventualidad de un agravamiento, se informa a los colegas médicos del Departamento de Accidentes y Emergencias del Hospital Mater Dei con vistas a un posible traslado a cuidados intensivos. Hasta la fecha no ha sido necesario recurrir a tales traslados.

4. Rastreo de contactos en colaboración con las autoridades de salud pública

157. Toda la labor de rastreo de contactos de los reclusos o funcionarios diagnosticados como pacientes de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia ha recaído en el equipo médico de la Agencia de Servicios Penitenciarios. Cada informe de localización de contactos se discute por teléfono o por escrito con las autoridades de salud pública. El rastreo de contactos se realiza el mismo día en que se conoce el resultado positivo de la prueba, para evitar retrasos en la atención.

*5*. Vacunación contra la COVID-19

158. Al 6 de junio de 2021, se habían administrado en prisión un total de 2.655 vacunas contra la COVID-19.

159. Estas cifras no incluyen a los pocos reclusos vacunados con la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer en la Clínica de Alergias Graves del Hospital Mater Dei. Tampoco incluye a quienes fueron vacunados en la comunidad antes ser encarcelados:

* Se han administrado 1.619 vacunas a los reclusos y 1.036 vacunas al personal.
* El 96 % del personal penitenciario ha aceptado la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.
* El 94 % de los reclusos ha aceptado la primera dosis de la vacuna contra la COVID‑19.
* El 76 % de los reclusos que han recibido la primera dosis en prisión también han recibido la segunda dosis en prisión. Otro 10 % ha recibido la segunda dosis en la comunidad, tras salir de la cárcel.
* Hasta la fecha, todos los reclusos que aceptaron la primera dosis de la vacuna han aceptado también la segunda.

Centros de detención

160. El Gobierno ha realizado los ajustes necesarios para reducir la propagación de la COVID-19 en recintos cerrados. Casi un año después del primer caso de COVID-19 diagnosticado en Malta, la situación de los centros de migrantes ha permanecido siempre bajo control.

161. En respuesta a la COVID-19, se ha creado un nuevo centro médico (HIRC), entre otras medidas de contingencia adoptadas para contener el brote de COVID-19. Se está destinando el edificio para alojar a los residentes que han dado positivo en las pruebas del virus y deben permanecer aislados hasta su recuperación. Es importante aclarar que no se trató a ninguna mujer ni a ningún menor en el Centro Médico del Centro de Acogida Inicial de Hal Far (HIRC). Las mujeres y niños con COVID-19 fueron aislados en sus respectivos centros de recepción o tratados en hospitales públicos o privados. Las migrantes embarazadas con COVID-19 dieron a luz sin ninguna complicación.

162. Se ha construido un nuevo centro médico en Safi, adyacente al centro cerrado. Se espera que entre en funcionamiento en las próximas semanas. Su objetivo es: i) constituir un polo para atender las necesidades sanitarias de los migrantes; y ii) brindar asistencia inmediata a los migrantes que necesiten atención médica.

163. Las medidas de mitigación fueron actualizadas y modificadas en función de las nuevas medidas implementadas por la Superintendencia de Salud Pública. Se ha repartido material de sensibilización en diferentes idiomas a los centros.

164. Los paquetes de higiene se distribuyen mensualmente o según la demanda. Incluyen mascarillas y desinfectantes de manos para reducir las posibilidades de infección por COVID-19. Todos los detergentes comprados por los Servicios de Detención son también desinfectantes certificados contra la COVID-19.

165. Una fábrica local de jabones ha creado un nuevo champú específicamente destinado a los Servicios de Detención. Es mucho menos tóxico que los productos convencionales, de modo que resulta más seguro en caso de ingesta.

166. Los migrantes también han sido incluidos en el plan de vacunación contra la COVID‑19 diseñado por las autoridades sanitarias. Los migrantes son vacunados en el marco del mismo proceso que el resto de la población, en función de su edad o estado de salud. Todo el personal que trabaja en los servicios de inmigración se considera personal de primera línea y está siendo vacunado en función de su edad o vulnerabilidad. Está previsto que la vacunación del personal de primera línea concluya a finales de abril de 2021. También es importante señalar que todos los residentes de los centros cerrados fueron vacunados contra el virus de la gripe en enero.

Trata de personas (art. 8)

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

167. Sírvanse consultar la información proporcionada en la sección A, entre las páginas 6 y 10.

Migrantes, solicitantes de asilo y refugiados (arts. 6, 7, 9 y 10)

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

168. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), las regiones de búsqueda y salvamento no están sujetas a la jurisdicción de los Estados, ya que se encuentran en alta mar, considerada patrimonio común de la humanidad. Así lo corrobora el artículo 2.1.7 del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento de 1979: “La delimitación de regiones de búsqueda y salvamento no guarda relación con la determinación de límites entre los Estados ni prejuzgará esta”. La obligación de los Estados en relación con las regiones de búsqueda y salvamento consiste en coordinar las operaciones de salvamento y no en ejercer jurisdicción territorial.

169. Malta rechaza enérgicamente las acusaciones de demoras arbitrarias en la respuesta a llamadas de socorro. Malta cumple sus obligaciones internacionales y siempre ha respondido a las llamadas de socorro en su región de búsqueda y salvamento. Todas las notificaciones recibidas son investigadas, evaluadas, priorizadas y dan pie a la adopción de medidas. Malta aspira a seguir respetando todas sus obligaciones internacionales de rescate de personas en peligro en el mar dentro de su zona de responsabilidad. Todos estos esfuerzos se llevan a cabo desde el pleno respetando plenamente los instrumentos pertinentes del derecho internacional y cumpliendo todas las obligaciones de búsqueda y salvamento establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las disposiciones aplicables del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento de 1979.

170. En caso de denuncia de delitos contra migrantes, existen mecanismos locales que prevén la apertura de una investigación judicial. A mediados de 2020, por ejemplo, se abrió una investigación judicial contra una serie de funcionarios que habían participado en una operación de búsqueda y salvamento para determinar si eran o no culpables de homicidio voluntario y/o involuntario, entre otros delitos. La investigación concluyó que no había base o motivos para procesarlos y no se presentaron cargos. Los migrantes y/o sus herederos legales también tienen la posibilidad de entablar procedimientos civiles por reclamaciones de derecho civil ante los tribunales locales, de conformidad con la legislación vigente.

171. Cabe señalar asimismo que los instrumentos internacionales hablan de “lugar seguro” y no de “puerto seguro”, término este de alcance e interpretación más restringidos.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

172. Independientemente de la clase o el tipo de embarcación utilizada para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y salvamento, la embarcación debe acatar y cumplir el marco legal pertinente. La medida de búsqueda y salvamento es reactiva, ya que un Estado contratante coordina, en ocasiones desplegando buques públicos o privados, las operaciones de búsqueda y salvamento. Las actividades de estas embarcaciones consisten específicamente en interceptar embarcaciones de migrantes y deben cumplir en todo momento las instrucciones de la autoridad de búsqueda y salvamento responsable. La exención prevista en el artículo 32, párrafo 1 a), así lo establece.

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

173. Para garantizar que la medida de detención sea necesaria y proporcionada, el sistema de acogida de Malta consta de tres etapas distintas de atención a los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares, a saber:

* Centros de acogida inicial
* Centros (de detención) cerrados
* Centros de régimen abierto

174. Las condiciones de detención están establecidas en el Reglamento de Acogida de Solicitantes de Asilo SL 420.06. La normativa contempla alternativas a la detención a disposición de la Policía de Inmigración. Estas medidas pueden alcanzar una duración no superior a 9 meses y pueden adoptar la forma de:

* Comparecencia en un lugar prestablecido en fechas específicas
* Residencia en un lugar predeterminado
* Depósito o entrega de documentos o
* Pago de una única garantía o fianza

175. Para proceder a la detención de un solicitante de asilo se debe contar con una orden de detención de la Policía de Inmigración, que informe al interesado del motivo de su detención, de conformidad con el Reglamento de Acogida de los Solicitantes de Asilo (por ejemplo, para verificar su identidad o nacionalidad, por razones de seguridad nacional o para preservar el orden público), así como acerca de las vías de reparación existentes. La orden de detención debe redactarse en un idioma que el migrante entienda. En caso de dificultad, se pone a disposición a un intérprete para que explique al interesado el contenido y los efectos de la orden.

176. La Junta de Apelación de Inmigración, que es un órgano independiente, revisa todas las órdenes de detención dictadas contra solicitantes de asilo en un plazo de siete días y, si se mantiene la detención de la persona, la orden es revisada al cabo de dos meses y de ahí en adelante cada dos meses. De acuerdo con el mencionado Reglamento, ningún solicitante de asilo puede permanecer detenido más de nueve meses.

177. Los grupos vulnerables, los niños y los menores no acompañados no pueden ser objeto de órdenes de detención, de conformidad con la legislación subsidiaria de la Ley de Protección Internacional. Los niños son confinados únicamente por motivos de salud y consideraciones relacionadas, cuando resulta imprescindible.

178. Los casos de familias con niños y menores no acompañados se procesan con rapidez para garantizar que puedan ser trasladados lo antes posible de un centro de acogida inicial a un centro de régimen abierto. Si la evaluación correspondiente permite corroborar la edad de un menor, este es trasladado de inmediato a un centro abierto.

179. Las familias con niños pequeños y los niños no acompañados y separados de sus padres o tutores son acogidos en el centro de acogida inicial en diferentes zonas, sin coincidir con adultos varones. También se ha autorizado a entrar y salir del centro a las familias con niños pequeños y a los menores no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran a la espera de alojamiento.

180. Se garantiza representación jurídica gratuita, tal como dispone la legislación vigente, en particular la Ley de Protección Internacional. Las autoridades competentes asignan un representante a los menores no acompañados, previa presentación de la solicitud pertinente. A este respecto cabe señalar que es imprescindible haber asignado previamente a un representante, que velará por que el menor no acompañados reciba la asistencia necesaria, para que la dirección de la Agencia de Protección Internacional pueda tramitar el procedimiento de asilo. Asimismo, una entrevista personalizada deberá contar con la presencia del representante del solicitante.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

181. Sírvanse consultar la información proporcionada en la sección A, páginas 10 a 12.

Asistencia jurídica gratuita (art. 14)

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

182. En abril de 2020, el Organismo de Asistencia Letrada de Malta puso en marcha un servicio de asesoramiento jurídico a las víctimas de la violencia doméstica. A tal fin contrató a abogados con formación especializada. El servicio también ha sido ampliado hasta cubrir las 24 horas del día. El Organismo de Asistencia Letrada ha elaborado, en colaboración con la Unidad de Apoyo a las Víctimas de la Policía y la Aġenzija Appoġġ, procedimientos operativos estándar, que han sido puestos en práctica para garantizar la prestación de servicios profesionales estándar en todas las entidades pertinentes.

183. Estas tres entidades han plasmado estos procedimientos operativos estándar en un memorando de entendimiento, firmado el 14 de septiembre de 2020 en presencia de los respectivos ministros. A las personas que acuden o son derivadas al Organismo de Asistencia Letrada de Malta por cuestiones de violencia doméstica se les asigna inmediatamente un abogado de oficio para que las asesore gratuitamente sobre su situación y, si es necesario, se las deriva a otras entidades pertinentes. El Organismo se esforzará por seguir prestando asistencia jurídica gratuita a las mujeres, los niños y las personas vulnerables víctimas de actos de violencia, con el fin de cumplir todas las disposiciones consagradas en el Convenio de Estambul y ratificadas en el capítulo 581 de las Leyes de Malta.

184. Por otro lado, Malta incorporó la Directiva relativa a la asistencia jurídica (Directiva 2016/1919) a su Código Penal en virtud de la Ley del Código Penal (Enmienda núm. 2) de 2020, lo que pone a nuestra legislación de asistencia jurídica en consonancia con las normas de la UE.

Independencia del poder judicial, administración de justicia y derecho a un juicio imparcial (art. 14)

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

185. Se llevaron a cabo importantes reformas constitucionales relativas al nombramiento y la destitución de los miembros del poder judicial. Estas reformas han supuesto la exclusión total del sector político.

186. A continuación se presenta un resumen sucinto con breves observaciones sobre las medidas legislativas adoptadas al respecto:

Ley de la Constitución de Malta (Enmienda) (Ley núm. XLIII de 2020)

187. Esta Ley se refiere al procedimiento de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los jueces y de los magistrados.

188. El Presidente del Tribunal Supremo será designado mediante un proceso parlamentario con los votos de dos terceras partes la Cámara de Representantes. En caso de alcanzarse dicha mayoría, el permanecerá en el cargo el Presidente del Tribunal Supremo en funciones hasta que se obtenga dicha mayoría.

189. Esta Ley también modificó la composición de la Comisión de Nombramientos Judiciales (“la Comisión”): la Fiscalía General ya no forma parte de la Comisión, cuya mayoría ha pasado a manos de miembros de la judicatura en activo.

190. La Ley también dispone que se abra una convocatoria pública en caso de vacante de juez o magistrado y establece una lista de requisitos objetivos.

191. En virtud de la Ley, los miembros del poder judicial son nombrados por el Presidente a partir de una lista de tres candidatos que le presenta la Comisión de Nombramientos Judiciales.

192. El procedimiento de nombramiento judicial introducido por esta ley supone una mejora respecto del sistema anterior, ya que debería permitir evitar las situaciones que motivan las críticas a la politización de los nombramientos judiciales.

193. En lo que respecta al derecho a un juicio imparcial, sírvanse remitirse a la información presentada en la sección A, página 13.

Ley de Leyes Diversas (Destitución) (Enmienda) de 2020 (Ley núm. XLV de 2020)

194. Esta Ley dispone un procedimiento de destitución del Fiscal General y del Abogado del Estado por la Comisión para la Administración de Justicia de Jueces y Magistrados y el Parlamento, aplicable en el caso de que lleguen a demostrarse conductas irregulares o la incapacidad para el desempeño de sus respectivas funciones.

195. El procedimiento de destitución del Fiscal General y del Abogado del Estado es similar al que se aplicaba anteriormente a los miembros del poder judicial. Se debe celebrar una audiencia ante la Comisión de Administración de Justicia y constatarse prima facie la conducta irregular o la incapacidad para el desempeño del cargo ante el Parlamento, tras lo cual, este puede plantear la moción de destitución.

196. El objetivo de esta enmienda es encontrar un punto de equilibrio entre un proceso de destitución exclusivamente parlamentario y un proceso judicial de remoción del Fiscal General y del Abogado del Estado, y representa un sistema mixto, que conlleva tanto un procedimiento cuasi judicial como un procedimiento parlamentario.

197. Otras modificaciones importantes introducidas por esta ley atañen al proceso de destitución de jueces y magistrados, que pasará a ser un proceso esencialmente judicial sujeto a recurso ante el Tribunal Constitucional.

198. La Ley también modifica la composición de la Comisión para la Administración de Justicia (“la Comisión”), ya que excluye a la Fiscalía General de la Comisión y otorga la mayoría de la misma al poder judicial. Esta modificación parece inscribirse en los nuevos poderes acumulados por la Comisión respecto de la remoción de miembros de la judicatura, que serán juzgados por sus propios pares.

Otras medidas adoptadas en relación con los miembros de la judicatura

199. El paquete financiero destinado a los miembros de la judicatura fue revisado al alza. Se aprobaron importantes aumentos salariales y de las prestaciones con vistas a otorgarles la máxima independencia y prevenir los riesgos de corrupción.

Reforma de las funciones de la Fiscalía General

200. En primer lugar, cabe recordar que desde el 18 de diciembre de 2019 la Fiscalía General ha perdido la doble función de asesorar al Gobierno y ejercer el ministerio público. La función de asesor del Gobierno ha pasado, con efectos a partir del 18 de diciembre de 2019, a la recién creada Abogacía del Estado. Así pues, la Fiscalía General ha pasado a especializarse y desempeñarse exclusivamente como ministerio público. El Fiscal General goza de una seguridad en el cargo similar a la de los miembros de la judicatura.

201. En marzo de 2020 la Fiscalía General dejó de desempeñar ninguna función en la Junta de Dirección de la Dependencia de Análisis de la Información Financiera.

202. En virtud de las modificaciones introducidas en la Constitución el 7 de agosto de 2020 (Ley núm. XLIII de 2020 y Ley XLV de 2020), el Fiscal General dejó de ser miembro de la Comisión para la Administración de Justicia y de la Comisión de Nombramientos Judiciales.

203. Así pues, el papel de la Fiscalía General ha cambiado sustancialmente en diez meses, para ceñirse ahora estrictamente a las funciones de un ministerio público.

204. Al concentrarse específicamente en sus funciones de ministerio público, la Fiscalía General empezó a asumir un amplio abanico de actividades de fiscalía y, en particular, a incoar procesos ante instancias judiciales inferiores, función habitualmente desempeñada por la policía. La Fiscalía General se trasladó en abril de 2020 a una sede más amplia, contrató a nuevos efectivos hasta duplicar el número de fiscales, publicó un Código Ético para Fiscales (2019) y concluyó un acuerdo colectivo para aumentar el paquete financiero destinado a fiscales.

205. El primer grupo de casos en los que la Fiscalía General tomó la decisión de incoar procesos ante tribunales inferiores, entre los que hay delitos graves como el homicidio voluntario, el terrorismo, la corrupción o el blanqueo de capitales, fue asumido por la Fiscalía el 1 de octubre de 2020 en virtud de la Notificación Legal 378 de 2020.

206. El 1 de octubre de 2020 entró en vigor la Ley de Revisión Judicial (decisiones de no enjuiciar y otras decisiones de la fiscalía) (Ley núm. XLI de 2020). Esta Ley incrementa la rendición de cuentas del Fiscal General al introducir la posibilidad de una revisión judicial (previa solicitud de revisión) de las decisiones de no incoar procesos judiciales por motivos de ilegalidad o irracionalidad. La Ley también abarca otras decisiones del Fiscal General, como las relativas a aquellos procesos que puede decidir incoar tan pronto un tribunal como ante otro, o las decisiones de no permitir el acceso a las actas de una investigación. La Ley también contempla el derecho del Auditor General, el Comisionado para las Normas de la Vida Pública, la Comisión Permanente contra la Corrupción y el Defensor del Pueblo, de solicitar la revisión judicial de las decisiones de no procesar adoptadas por la Fiscalía General a raíz de informes sobre prácticas corruptas que hayan elaborado ellos. Se trata de una importante excepción a la regla de que únicamente la parte damnificada puede solicitar la revisión judicial de una decisión de procesamiento. La Ley supone un paso importante para garantizar la apertura y la responsabilidad del ministerio público y en aras de un equilibrio adecuado entre los derechos e intereses de la sociedad en su conjunto y los de las partes damnificadas.

207. La Fiscalía General no tiene una función legislativa ni de asesoramiento legislativo al margen de los ámbitos que afectan al derecho penal. Cuenta por tanto con escasa legitimidad para pronunciarse sobre la legislación constitucional aprobada por el Parlamento, fruto de la negociación y el compromiso políticos.

Derecho a la vida privada (art. 17)

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

208. El Servicio de Seguridad de Malta es la entidad depositaria de la fuerza pública en virtud de la Ley de Servicios de Seguridad de Malta, capítulo 391 de las Leyes de Malta.

209. Los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad se enuncian en el artículo 6 de la Ley de Servicios de Seguridad, en particular:

* El artículo 6, párrafo 3 a), enuncia los principios de legalidad y necesidad al disponer que “si el Ministro: a) estima necesaria una actuación por considerar que probablemente tenga un valor sustancial para ayudar al Servicio a llevar a cabo cualquiera de sus funciones en virtud de esta Ley”.
* El artículo 6, párrafo 3 b), enuncia el principio de proporcionalidad al disponer que “si el Ministro: (b) tiene la certeza de que el propósito de la actuación no puede alcanzarse razonablemente por otros medios”.

210. En lo que respecta a la autorización judicial, el artículo 8, párrafo 1, establece específicamente que “no se emitirá ni se modificará una orden de detención salvo: a) por decisión del propio Ministro; o b) en caso de urgencia, cuando el Ministro haya autorizado expresamente su emisión o modificación y se haya hecho constar en la orden, por decisión de un alto funcionario del Estado”. Por otro lado, el artículo 11 faculta al Primer Ministro a ejercer, cuando lo estime necesario, cualesquiera de sus competencias en virtud de la Ley. Sin embargo, la Ley no prevé ninguna autorización judicial.

211. En cuanto a los mecanismos de supervisión eficaces e independientes, la Ley del Servicio de Seguridad establece dos mecanismos importantes:

* El artículo 12 prevé el nombramiento de un Comisionado independiente, que debe haber ocupado previamente el cargo de juez en tribunales superiores o el cargo de Fiscal General. El Comisionado está facultado para examinar el ejercicio del Ministro en lo que respecta a órdenes de detención y para requerir la información o los documentos pertinentes que estime necesarios. El Comisionado también informa anualmente al Comité de Seguridad y al Primer Ministro sobre cualquier asunto relacionado con sus funciones legales.
* El artículo 13 faculta al Comisionado a llevar a cabo investigaciones sobre las quejas relativas al Servicio de Seguridad, y el Anexo 1 de la Ley define el procedimiento que debe seguirse en tales circunstancias.
* El artículo 14 establece el Comité de Seguridad, compuesto por el Primer Ministro, el Ministro del Servicio de Seguridad, el Ministro de Relaciones Exteriores y el líder de la oposición. Su cometido es examinar los gastos, la administración y la política del Servicio de Seguridad, e informar a la Cámara de Representantes presentándole un informe anual. El anexo 2 de la Ley establece el mandato del Comité de Seguridad.

212. El Servicio de Seguridad de Malta emprendió en 2020 un ejercicio de revisión del marco legal en el que opera y priorizó tres áreas importantes en las que hacer sus propuestas para el futuro, entre ellas las disposiciones que regulan las órdenes judiciales, la injerencia en la intimidad y la vigilancia.

Libertad de expresión (art. 19)

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

213. La Ley de Medios de Comunicación y Lucha contra la Difamación introdujo varias disposiciones que refuerzan la libertad de los medios de comunicación y prohibió la multiplicación de demandas por calumnias relacionadas con una misma pieza periodística. Por otro lado, la nueva ley no añade nuevas cargas a los periodistas ni a los propietarios de los medios de comunicación en términos de daños civiles por calumnia. Al margen de eso, elimina la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra periodistas y de presentar múltiples demandas contra ellos por un mismo hecho. Aunque nuestras leyes ya establecen una serie de salvaguardias apropiadas, Malta tiene la determinación de asumir un rol puntero en la aprobación de legislación específica para combatir las demandas estratégicas contra la participación pública a nivel nacional e impulsar la eficacia del marco jurídico existente. Malta tiene previsto formalizar enmiendas legislativas para garantizar que nuestros periodistas estén protegidos y puedan trabajar en condiciones adecuadas.

214. Las investigaciones sobre la incitación al odio y los delitos de odio contra periodistas han sido asignadas a la Brigada Antivicio. Se han incorporado dos equipos de investigación adicionales a esta brigada. Se ha impartido formación especializada a los agentes sobre cómo interactuar eficazmente con las víctimas de delitos de odio en el primer contacto. En abril de 2021 se puso en marcha una Agencia de Apoyo a las Víctimas, que incorpora los servicios prestados a las víctimas de delitos, al tiempo que colabora estrechamente con ONG.

215. Por otro lado, la Unidad de Ciberdelincuencia del Departamento de Apoyo Técnico de la Fuerza de Policía de Malta presta asistencia técnica en la esfera de la detección y la investigación de delitos relacionados con la tecnología digital. También participa en investigaciones de delitos como el fraude y las amenazas. Analiza asimismo las pruebas digitales incautadas en el marco de las investigaciones e identifica a personas que cometen delitos a través de Internet. Cualquier otra amenaza señalada a la atención de la policía es tratada de inmediato.

Daphne Caruana Galizia

216. El 16 de octubre de 2017 se inició una investigación, tras denunciarse el asesinato de Daphne Caruana Galizia. La investigación sigue en curso.

217. En diciembre de 2017, tres personas (George Degiorgio, Alfred Degiorgio y Vincent Muscat) comparecieron ante un tribunal acusados del asesinato de Daphne Caruana Galizia. En 2019, otra persona (Yorgen Fenech) fue juzgada por el mismo asesinato.

218. Recientemente se han producido importantes avances en las investigaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia. El 23 de febrero de 2021, se dictó la primera condena relacionada con este asesinato: el Sr. Vincent Muscat fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión efectiva y al pago del producto del delito, así como a su parte de las costas judiciales.

219. Al día siguiente, 24 de febrero de 2021, otras dos personas (Robert Agius y Jamie Vella) comparecieron ante el tribunal acusadas de participar en el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Las sesiones se celebran con regularidad y las pruebas se recopilan debidamente.

220. Por otra parte, la recopilación de pruebas contra otras dos personas (George Degiorgio y Alfred Degiorgio) procesadas en 2017 en relación con el asesinato de Daphne Caruana Galizia culminó en un auto de procesamiento el 16 de julio de 2019. El tribunal penal, en virtud de su sentencia del 30 de octubre de 2020, desestimó todas las alegaciones previas presentadas por los acusados. Estos apelaron la sentencia ante el Tribunal de Apelación Penal y su recurso fue resuelto el 22 de septiembre de 2021. Una vez dictada la sentencia del Tribunal de Apelación Penal, puede celebrarse la audiencia del juicio con jurado.

221. El 18 de agosto de 2021 concluyó la recopilación de pruebas contra el presunto autor intelectual (Yorgen Fenech), que fue imputado y se enfrentará a un juicio con jurado. Culminan así los avances logrados en relación con este caso a principios de año.

222. Los avances logrados recientemente en el caso del asesinato de Daphne Caruana Galizia constituyen pasos importantes para que se haga justicia. Malta mantiene su determinación de tomar las medidas necesarias en aras de la justicia y para disuadir cualquier atentado contra la seguridad y la dignidad de periodistas en el futuro.

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

223. El Gobierno de Malta tiene la determinación de salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y ha promulgado la Ley de Medios de Comunicación y Lucha contra la Difamación (capítulo 579 de las Leyes de Malta), en vigor desde el 14 de mayo de 2018. El objetivo de la Ley es actualizar y reformular la legislación maltesa sobre calumnias e injurias para reforzar el respeto del derecho a la libertad de expresión. La nueva Ley promueve asimismo el uso de medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, e introduce un sistema de audiencia preliminar en las causas por difamación con vistas a determinar la posibilidad de resolver casos por medio del acuerdo o la mediación. La principal novedad de la Ley de Medios de Comunicación y Lucha contra la Difamación es que ya no permite emprender acciones penales contra periodistas por calumnia, injurias y difamación. De este modo se protege al cuarto pilar de la democracia, ya que la libertad de los medios de comunicación no se ve coartada en modo alguno por la amenaza de procedimientos penales contra los periodistas, que antes servía para silenciarlos.

224. La Ley de Medios de Comunicación y Lucha contra la Difamación también fue redactada y promulgada tras un extenso proceso de consultas con, entre otros, el Instituto de Periodistas Malteses y la OSCE, a través del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación. En virtud de esta Ley, la protección de las fuentes se hace extensiva a todos los redactores, editores, autores, operadores de sitios web o responsables de emisoras de radio o televisión. La Ley prohíbe la emisión de órdenes de embargo cautelares y otras medidas cautelares en favor de la parte demandante en juicios civiles por calumnias contra periodistas. Se introdujo otra disposición importante para desalentar la presentación de demandas estratégicas contra la participación pública: en la eventualidad de que una misma persona presente múltiples demandas por calumnias en relación con la publicación de un mismo artículo, la pena por daños y perjuicios impuesta por todos esos casos tomados conjuntamente no podrá superar los 11.640, como si se tratara de un único caso.

225. Se introdujeron otras enmiendas positivas, como las relativas a la definición de las nociones de “difamación”, “calumnia” e “injurias”; el concepto de daño grave; la despenalización de delitos; la supresión de las órdenes de incautación y de las órdenes de embargo; el fortalecimiento de la defensa de la verdad y la introducción de la defensa de la opinión honesta; y la introducción de la norma sobre la publicación única.

226. Esta Ley se inscribe en la reforma de la justicia que se está llevando a cabo, al igual que otros nuevos proyectos de ley o enmiendas presentados al Parlamento, como las enmiendas a la Constitución que abordan la Opinión de la Comisión de Venecia, las enmiendas destinadas a fortalecer el Estado de Derecho y la reciente aprobación de la posibilidad de celebrar audiencias de procedimientos civiles por videoconferencia en directo. Estas propuestas legislativas contribuyen a consolidar el sistema de contrapoderes institucionales y a hacer avanzar la democracia maltesa.

227. Con la entrada en vigor de la Ley de Medios de Comunicación y Lucha contra la Difamación, en abril de 2018, quedó derogado el capítulo 248 de las Leyes de Malta, lo que supuso la abolición del delito penal de calumnias. En lo que respecta a las causas por calumnias en marcha, hay 45 en curso, 9 terminadas (tras dictarse sentencia) y 12 admitidas a trámite.

Derecho de reunión pacífica (art. 21)

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

228. La Fuerza de Policía de Malta siempre ha tramitado favorablemente las solicitudes de celebración de protestas/manifestaciones públicas. Cuando estos actos se han celebrado sin haberse notificado previamente a la policía, se ha permitido que tengan lugar, ya que la Fuerza de Policía reconoce y salvaguarda el derecho de reunión pacífica.

229. Es más, la policía estuvo presente en todos estos actos, veló por que transcurrieran pacíficamente y garantizó la seguridad de los participantes. Cuando estos actos, ya fueran organizados o espontáneos, han requerido desviar y supervisar el tráfico rodado, la policía ha hecho todo lo posible por gestionar la situación y garantizar la seguridad pública de todos.

1. \* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial. [↑](#footnote-ref-1)